



Asamblea General

Distr. general
29 de septiembre de 2021
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos

46º período de sesiones

22 de febrero a 19 de marzo de 2021

Tema 3 de la agenda

**Promoción y protección de todos los derechos humanos,
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,
incluido el derecho al desarrollo**

Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, Thomas H. Andrew* **

Resumen

Este informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar se presenta de conformidad con la resolución 43/26 del Consejo de Derechos Humanos. En el informe, el relator especial reflexiona sobre la situación de los derechos humanos antes y después del golpe de Estado militar y formula recomendaciones para la protección y promoción de los derechos humanos en el país.

* Este informe se presentó con retraso para incluir en él la información más reciente.

** Los anexos del presente informe se distribuyen tal como se recibieron, únicamente en el idioma en que se presentaron.



I. Introducción

1. El golpe de Estado militar iniciado el 1 de febrero de 2021 por el General Min Aung Hlaing y altos oficiales del ejército tuvo repercusiones inmediatas en el entorno político, social y económico de Myanmar y en cuestiones fundamentales de derechos humanos. Dada la gravedad de las violaciones de los derechos humanos vinculadas a la toma del poder por los militares y en el contexto de la resolución S-29/1 del Consejo de Derechos Humanos, de 12 de febrero de 2021, la parte principal del presente informe se centra esencialmente en los acontecimientos ocurridos en Myanmar después del golpe de Estado y refleja la situación de los derechos humanos en el país a 1 de marzo de 2021. El Anexo III deja constancia de la situación de los derechos humanos durante 2020 y hasta el golpe de Estado. De no haber tenido lugar el golpe, el anexo III habría constituido la parte principal del informe.

2. Las reuniones del Relator Especial en Myanmar han sido, necesariamente, virtuales. En su primer día como titular del mandato solicitó formalmente una visita a Myanmar, mediante una carta dirigida a la Consejera de Estado Aung San Suu Kyi. Se le informó de que, debido a la pandemia, no sería posible realizar una visita al país. Posteriormente ha reiterado esa solicitud. Aunque no pudo realizar una visita al país, llevó a cabo una amplia investigación sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, tanto antes como después del golpe de Estado, reuniéndose virtualmente con una gran variedad de fuentes, entre ellas miembros de la sociedad civil, periodistas, defensores de los derechos humanos, activistas, parlamentarios de numerosos Estados miembros, representantes de organizaciones internacionales, miembros de la comunidad diplomática, mecanismos internacionales de derechos humanos y miembros de la comunidad empresarial. El Relator Especial agradece la información y los análisis valiosos proporcionados por todos los interlocutores y subraya que no habría sido posible elaborar el informe sin su apoyo.

II. Golpe de Estado

3. El 1 de febrero de 2021, el ejército de Myanmar derrocó al Gobierno civil mediante un golpe de Estado ilegal. Tras autoproclamarse “Consejo de Administración del Estado”, la junta comenzó a cometer violaciones de los derechos humanos, como asesinatos, detenciones arbitrarias, palizas y probables desapariciones forzadas. El Consejo de Administración del Estado también estableció leyes y políticas para restringir la libertad de expresión, la libertad de reunión y asociación pacíficas y el derecho a la privacidad. El golpe anuló por completo el estado de derecho en Myanmar.

4. A pesar de las amenazas de la junta, en particular un mensaje emitido por la televisión nacional en el que se decía que quienes participaran en las protestas podrían “perder la vida”, surgió un movimiento de desobediencia civil no violenta en todo el país, que trascendió el origen étnico, la religión y la situación socioeconómica. Millones de personas se han manifestado en cientos de municipios, oponiéndose al gobierno militar.

5. Entre el 1 de febrero y el momento de redactar este informe, la junta privó de libertad de forma arbitraria a más de 1.200 personas y mató al menos a 23. Los enfrentamientos violentos y las detenciones arbitrarias están aumentando a un ritmo alarmante. Ante una economía que se contrae bajo el peso de un poderoso movimiento de desobediencia civil, el Presidente Min Aung Hlaing amenazó a los funcionarios que estaban en huelga con la adopción de medidas disciplinarias si no volvían al trabajo. La población no se deja intimidar.

A. Pretexto electoral

6. El 8 de noviembre de 2020 se celebraron elecciones nacionales en todo el país. La Liga Nacional para la Democracia (LND) consiguió una mayoría absoluta, con 396 de los 476 escaños, mientras que el Partido para la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión (PSDU), apoyado por los militares, obtuvo 33.

7. El PSDU alegó un fraude masivo y los militares exigieron que la Comisión Electoral de la Unión de Myanmar investigara las denuncias de irregularidades en la votación, a pesar

de que los observadores independientes no señalaron ninguna prueba de irregularidades. El ejército de Myanmar alegó primero 8,6 millones de casos de irregularidades en las listas de votantes y luego 10,5 millones, repartidos en 314 municipios. Los militares afirmaron que las presuntas irregularidades podrían haber cambiado el resultado de las elecciones.

8. El 26 de enero de 2021, un portavoz militar advirtió que el ejército tomaría medidas si no se resolvía la disputa electoral, y añadieron que los militares no decían que fueran a tomar el poder ni que no fueran a hacerlo. El Comandante en Jefe Min Aung Hlaing afirmó entonces que la Constitución podría ser revocada, lo que hizo temer aún más un golpe de Estado. A continuación, el ejército desplegó vehículos militares, incluidos vehículos blindados de transporte de personal, en las calles de Rangún y Naipyidó y en otros lugares.

9. El 28 de enero, la Comisión Electoral anunció que no había pruebas que respaldaran la afirmación de fraude generalizado. Dijo que estaba investigando 287 quejas y reconoció que habían aparecido nombres duplicados en algunas listas, pero subrayó que los votantes no podían depositar varias papeletas con los dedos marcados con tinta indeleble. Esta conclusión despejó el camino para que el nuevo parlamento tomara posesión el 1 de febrero.

10. Según se informa, ante el aumento de las tensiones, representantes de la LND y del ejército mantuvieron conversaciones durante los días anteriores al 1 de febrero. Los representantes del ejército habrían exigido que se demorara la constitución del Parlamento, se disolviera la Comisión Electoral y se volvieran a examinar los votos bajo supervisión militar. Min Aung Hlaing declaró públicamente que los comentarios de los militares sobre un golpe de Estado y sobre la Constitución habían sido malinterpretados. Los informes y las acciones posteriores indican que las conversaciones fracasaron.

B. Derrocar al Gobierno elegido

11. A partir de las 03.00 horas del 1 de febrero, antes de que los parlamentarios recién elegidos pudieran jurar su cargo, los militares iniciaron su golpe de Estado en contravención de la ley. El ejército interrumpió las telecomunicaciones en casi todo el país, cortando los servicios de voz, texto e Internet móvil. Los militares se hicieron entonces con el control de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo; detuvieron a decenas de funcionarios gubernamentales, entre ellos la Consejera de Estado Aung San Suu Kyi y el Presidente Win Myint; detuvieron a activistas; y pusieron bajo arresto domiciliario en Naipyidó a los parlamentarios debidamente elegidos.

12. El 1 de febrero, el ejército de Myanmar invocó el artículo 417 de la Constitución, que permite que los militares tomen el poder durante un año en caso de que el Presidente declare el estado de emergencia ante una situación que amenace la soberanía del país, pueda conducir a la disolución de la Unión o amenace la preservación de la solidaridad nacional. La junta anunció la creación del Consejo de Administración del Estado, con Min Aung Hlaing como Presidente. A continuación, la junta nombró nuevos directores de ministerios, sustituyó a los miembros de la Comisión Electoral, promulgó nuevas leyes draconianas y modificó las vigentes, nombró nuevos jueces para el Tribunal Supremo y estableció cinco condiciones necesarias para abandonar el poder: reconstituir la Comisión Electoral, hacer frente a la epidemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), mejorar la economía, restablecer la “paz eterna” con las organizaciones étnicas armadas y celebrar elecciones democráticas¹.

13. Incluso en el caso de que hubieran existido ciertas irregularidades electorales, no justificarían la declaración del estado de emergencia, la toma de control de la administración y la detención de dirigentes civiles y miembros de la sociedad civil. Aun teniendo en cuenta la redacción imprecisa de la Constitución, las alegaciones de irregularidades en la votación no alcanzan el nivel de las condiciones constitucionales que deben preceder a la invocación legal del artículo 417 para declarar un estado de emergencia, lo que solo puede hacerse en situaciones que puedan disolver la Unión, “desintegrar” la solidaridad nacional o causar la pérdida de soberanía. Estas situaciones también deben ser causadas por determinados tipos

¹ Consejo de Administración del Estado, notificación núm. 1/2021, 2 de febrero de 2021; y discurso de Min Aung Hlaing del 8 de febrero de 2021.

de actos o tentativas de actos que se enumeran, como: insurgencia, violencia o medios de fuerza ilícitos. La preocupación por las listas de votantes no llega a este nivel.

14. Además, según la Constitución, la toma de poder por los militares se llevó a cabo en contravención de la ley. De conformidad con el artículo 417, solo el Presidente de Myanmar puede declarar un estado de emergencia, y únicamente tras consultar con el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional. Sin embargo, como el ejército de Myanmar había destituido ilegalmente al Presidente Win Myint, éste no podía declarar públicamente nada y mucho menos el estado de emergencia. El Vicepresidente Myint Swe, nombrado por el ejército, declaró un estado de emergencia en contravención de la ley. De conformidad con el artículo 421 a), el Presidente debe solicitar el consentimiento del Parlamento (“someter la cuestión de la transferencia del poder soberano”) en una sesión legislativa ordinaria o de emergencia. Esto, por supuesto, no sucedió porque el Parlamento había sido disuelto.

15. Según la Constitución de 2008, redactada por los militares, el golpe de Estado es ilegal. Los generales violaron sus propias reglas cuando tomaron el control del gobierno. Por lo tanto, el Consejo de Administración del Estado y sus acciones son ilegítimos.

III. La población de Myanmar ejerce sus derechos

16. El golpe de Estado militar ha unido a la población de Myanmar. Millones de personas han salido a las calles en todo el país para exigir democracia y derechos humanos y el fin inmediato de la junta. Entre los manifestantes hay monjes budistas y clérigos musulmanes que caminan juntos; funcionarios de diversos sectores; médicos y enfermeras, trabajadores y miembros de sindicatos, banqueros y educadores; personas de etnia karén, chin, shan, kachín y de otros grupos étnicos; personas muy jóvenes y personas de edad muy avanzada. La población de Myanmar exige con razón la puesta en libertad del Consejero de Estado, del Presidente y de todos los presos políticos. Muchos reclaman una nueva constitución que aparte a los militares de la política de una vez por todas. La gran mayoría de la población de Myanmar está unida en una vehemente oposición al golpe de Estado y abraza el movimiento de desobediencia civil. Muchos manifestantes de la mayoría étnica birmana también han expresado su pesar por no haber reconocido anteriormente los crímenes atroces del ejército contra las minorías étnicas, refiriéndose específicamente a los rohinyá.

A. Movimiento de desobediencia civil

17. A las 20.00 horas del 2 de febrero, el día siguiente al golpe de Estado, los habitantes de todo el país golpearon al unísono ollas y sartenes —una práctica tradicional para ahuyentar a los espíritus malignos— con el fin de protestar por la toma del poder por los militares. Para el 6 de febrero se afianzó un movimiento de desobediencia civil bien organizado, aunque sin líderes en el plano orgánico y nominal. Trabajadores de la salud, celebridades, funcionarios, profesores, abogados, líderes religiosos y otras personas participaron en la campaña desde el principio. La “Generación Z” (los menores de 25 años) asumió una función destacada y de liderazgo en el movimiento.

18. El Relator Especial recibió informes que indicaban que los trabajadores del sector público de al menos 245 municipios (de 330) que representan a 21 ministerios se pusieron en huelga durante las primeras semanas del golpe de Estado. La huelga se extendió desde los trabajadores sanitarios hasta los empleados del sector público de numerosos ministerios, entre ellos los responsables de ferrocarriles, aduanas, comercio, electricidad y energía, transportes y comunicaciones, agricultura, ganadería y riego. Los docentes y los empleados del banco central y otros funcionarios del gobierno también se unieron. En el sector privado, los sindicatos llamaron a sus miembros a la huelga, y los cajeros de los bancos, los cocineros, los trabajadores de los supermercados, entre otros, se unieron al movimiento.

19. El 19 de febrero se formó un comité de huelga general contra la dictadura militar con el objetivo de crear comités de huelga regionales, apoyar a los participantes en el movimiento

de desobediencia civil y mantener y coordinar el movimiento². Las mayores protestas en las calles desde el golpe de Estado —y muy posiblemente de todos los tiempos en Myanmar— tuvieron lugar el 22 de febrero (denominado “Five 2s”), con estimaciones no confirmadas de millones de personas en todo el país que salieron a la calle, a pesar de la amenaza relativa a la “pérdida de vidas” formulada por la junta el día anterior en la televisión³. La población de Myanmar ha celebrado protestas pacíficas al menos en 247 de los 330 municipios del país.

20. El movimiento de desobediencia civil ha paralizado prácticamente las funciones del Estado. Según informaciones, las huelgas en casi todos los sectores de la sociedad, incluido el bancario, han hecho que la circulación de dinero físico sea escasa y las transacciones en los bancos han cesado prácticamente. La moneda del Estado, el kyat, se ha depreciado, lo que ha disparado los costes mientras muchos empleados no cobran. Las importaciones de petróleo refinado se han estancado.

21. A la pregunta de cuánto tiempo podría aguantar la población las privaciones de una huelga, un manifestante afirmó que podría aguantar todo el tiempo que hiciera falta, señalando que la mayoría ya había vivido privaciones y había aprendido a prescindir de muchas cosas. Varias personas indicaron que temían resultar heridas o muertas por los militares durante las protestas; sin embargo, todos dijeron que lo que más temían era el regreso a una dictadura militar.

22. Un grupo de líderes del movimiento de desobediencia civil dio a conocer cinco peticiones y objetivos esenciales: a) liberar a todas las personas privadas de libertad, b) suprimir la dictadura militar, c) alcanzar la democracia, d) establecer una unión democrática federal y e) abolir la Constitución de 2008.

B. Comité que representa a la Pyidaungsu Hluttaw

23. El 4 de febrero, 390 parlamentarios de la LND debidamente elegidos firmaron su juramento en Naypyidó, desafiando a la junta. Los diputados afirmaron que la acción se ajustaba a la Constitución de 2008, pues ya habían recibido oficialmente sus cartas de acreditación de la Comisión Electoral. Además, mientras la Constitución de 2008 siguiera en vigor, alegaban, nadie podía revocar su condición de miembros del Parlamento. Al día siguiente, el 5 de febrero, 15 diputados crearon formalmente el Comité de Representación de la Pyidaungsu Hluttaw para apoyar el movimiento contra el golpe. El 10 de febrero se incorporaron al Comité dos diputados étnicos, uno del Partido Democrático del Estado de Kayah y otro del Partido Nacional de Ta'ang, con lo que el Parlamento cuenta ahora con 17 miembros. Los principales objetivos del comité son garantizar la puesta en libertad incondicional de las personas que han sido objeto de detención arbitraria, desempeñar las funciones del Parlamento y formar un gobierno.

24. Los miembros del Comité se niegan a reconocer al Consejo de Administración del Estado y han declarado que el golpe no revoca la autoridad legítima que les ha confiado el pueblo. El 1 de marzo, el Comité designó al Consejo de Administración del Estado como organización terrorista. El Comité pidió a la comunidad internacional que siguiera reconociendo al gobierno liderado por la LND como autoridad legítima de Myanmar, con el Comité en una función de apoyo. El Comité nombró a Salai Maung Taing San (conocido como Dr. Sasa), un destacado miembro de la etnia chin, como Enviado Especial ante las Naciones Unidas y a Htin Lin Aung como Representante Especial para las Relaciones Internacionales.

25. Once asambleas estatales y regionales se han reunido y han respaldado al Comité (las de los estados de Kayah, Mon y Rakáin no lo han hecho). El Comité también recibió el apoyo de destacados miembros del movimiento de desobediencia civil, como la Asociación de Abogados de Myanmar y los trabajadores sanitarios.

² Comité de huelga general contra la dictadura militar, declaración núm. 1/2021, 19 de febrero de 2021.

³ Consejo de Administración del Estado, declaración en la Radio y Televisión de Myanmar (MRTV), 21 de febrero de 2021.

26. El 15 de febrero, el Consejo de Administración del Estado dictó órdenes de detención contra todos los miembros del Comité en virtud del artículo 505 b) del Código Penal, y Min Aung Hlaing se refirió al Comité como un gobierno paralelo. Los 17 miembros del Comité siguen ocultos.

27. Dirigiéndose a la Asamblea General en una reunión informal el 26 de febrero, el Representante Permanente de Myanmar ante las Naciones Unidas, Kyaw Moe Tun, expresó su condena inequívoca a los militares y al golpe de Estado. En lo que describió como un mensaje del Comité, pidió a los Estados miembros y a las Naciones Unidas que tomaran las “medidas más enérgicas posibles para detener los actos violentos y brutales cometidos por las fuerzas de seguridad contra manifestantes pacíficos, y que pusieran fin de inmediato al golpe de Estado militar”⁴. La televisión estatal de Myanmar anunció al día siguiente que Kyaw Moe Tun había sido despedido, diciendo que había traicionado al país. A 1 de marzo, las Naciones Unidas seguían reconociendo a Kyaw Moe Tun como Representante Permanente de Myanmar.

IV. Violación de derechos por el Consejo de Administración del Estado

28. La junta ha respondido a las protestas no violentas y pacíficas con asesinatos, palizas, detenciones arbitrarias masivas, intimidación (incluida la amenaza transmitida por la televisión estatal antes mencionada) y represión sistemática de los derechos civiles y políticos. Continúan las huelgas y las protestas multitudinarias.

A. Asesinatos

29. El Relator Especial recibió información fidedigna según la cual, hasta el 1 de marzo, las fuerzas de seguridad de Myanmar habían asesinado al menos a 23 personas. Sin embargo, subraya que, en el momento de redactar este informe, estaban surgiendo detalles de una represión mortal en todo el país el 3 de marzo, con información digna de crédito aún por confirmar de que al menos 38 personas resultaron muertas solo en ese día. Todos los asesinatos cometidos desde el golpe de Estado vulneran el derecho internacional y muchos de ellos, aunque no todos, se describen a continuación en el contexto en el que los cometieron las fuerzas de seguridad de la junta.

Una adolescente asesinada en Naipyidó

30. El 8 de febrero de 2021, Min Aung Hlaing se dirigió a la población de Myanmar por televisión en directo por primera vez desde el golpe de Estado ilegal. Subrayó que los militares estaban asumiendo la responsabilidad del Estado por razones inevitables, y que construirían un sistema democrático auténtico y disciplinado⁵. Ese mismo día, la junta invocó el artículo 144 del Código de Procedimiento Penal en los municipios de todo el país, prohibió las reuniones públicas de más de cinco personas e impuso un toque de queda de 20.00 horas a 04.00 horas⁶.

31. El 8 de febrero, la policía de Myanmar utilizó cañones de agua contra los manifestantes y disparó balas de goma directamente contra ellos, incluso en Naipyidó.

32. El 9 de febrero, decenas de miles de personas salieron a la calle en más de 300 pueblos y ciudades de todo Myanmar. Una estudiante de 19 años se encontraba entre los manifestantes en Naipyidó ese día, exigiendo la vuelta al gobierno civil. Cuando la policía disparó un cañón de agua contra una multitud de manifestantes, ella y su hermana se pusieron a cubierto detrás de una parada de autobús. El Relator Especial ha visto imágenes de vídeo

⁴ “Myanmar Ambassador to UN denounces military coup, as envoy warns democratic processes have been ‘pushed aside’”, UN News, 26 de febrero de 2021.

⁵ Televisión estatal de Myanmar, originalmente en <https://www.facebook.com/523763414336156/posts/3858998297479301/?sfnsn=mo>.

⁶ “Section 144 of Criminal Procedure imposed in Nay Pyi Taw territory and townships in states/regions”, *Global New Light of Myanmar*, 10 de febrero de 2021.

en las que se ve cómo la víctima, que llevaba un casco y estaba de espaldas a la policía, se desploma repentinamente. Su hermana le quitó el casco a la víctima, con lo que se pudo ver sangre y lo que parecía ser una herida de entrada en la parte posterior de la cabeza.

33. La hermana de la víctima y otras personas la trasladaron rápidamente al hospital general de Naipyidó. Según el médico que la atendió, la víctima había recibido un disparo en la cabeza con fuego real, la herida era mortal y efectivamente estaba en estado de muerte cerebral. Un médico que se encontraba en el lugar de los hechos informó de que los militares intentaron trasladar a la víctima a un hospital militar para, en opinión del médico, intentar ocultar las pruebas del incidente, pero el médico argumentó con éxito que la gravedad de su lesión requería que se quedara donde estaba. El médico está ahora escondido porque teme las repercusiones de la junta.

34. En un comunicado, la junta negó la responsabilidad, alegando que el 9 de febrero la policía solo llevaba armas antidisturbios y que la bala encontrada en el cerebro de la víctima no era compatible con la munición que utilizaba la policía. El Relator Especial vio fotografías en las que se veía a un agente de la policía de Myanmar estacionado en las proximidades de la víctima apuntando con una versión producida en Myanmar de una Uzi israelí, lo que desmiente la afirmación de que la policía solo desplegó equipo antidisturbios.

35. El dirigente de la junta, Min Aung Hlaing, también negó el asesinato en una reunión del Consejo de Administración del Estado celebrada el 23 de febrero. En informes publicados, Min Aung Hlaing culpó al parecer a la víctima de sus lesiones, diciendo que había participado en los disturbios. Repitió la afirmación infundada de que la policía solo utilizó balas de goma.

36. El cumpleaños de la víctima fue dos días después de que le dispararan y su familia le retiró el soporte vital una semana después. Falleció el 19 de febrero. Miles de personas se reunieron en su cortejo fúnebre.

Tres hombres y un adolescente asesinados en Mandalay

37. El 19 de febrero, mientras el movimiento de desobediencia civil y la huelga general seguían cobrando fuerza, los funcionarios (trabajadores portuarios) del astillero Yadanarbon, gestionado por el gobierno, en Mandalay, se pusieron en huelga e impidieron la salida de un buque. La policía de Myanmar intervino e intentó obligar a los trabajadores portuarios a volver al trabajo. Los residentes de los alrededores no tardaron en reunirse para protestar por la actuación de la policía, que luego agredió a los manifestantes. El Relator Especial vio un vídeo que mostraba a la policía cargando contra los manifestantes y disparando contra ellos. Los informes transmitidos desde Mandalay el 20 de febrero indicaban que las fuerzas de seguridad de Myanmar habían disparado más de 100 veces contra los manifestantes, incluso con munición real.

38. Un joven de 16 años se encontraba entre las personas que recibieron disparos. Trabajaba en un mercado local, donde los vendedores le llamaban “chico”, y su objetivo era ganar suficiente dinero para comprar un teléfono móvil y una moto. Se unió a las protestas el 20 de febrero cuando el grupo llegó al mercado donde trabajaba. El Relator Especial vio imágenes de vídeo y fotos de numerosas personas refugiándose de los disparos. Momentos después de que los manifestantes se refugiaron, se ve al muchacho tendido en el suelo con una gran herida mortal de arma de fuego en la cabeza. El Relator Especial también vio imágenes de vídeo que mostraban su traslado a un centro de triaje improvisado en un monasterio, donde personal sanitario voluntario estaba tratando a algunas personas con heridas de armas de fuego. El personal sanitario determinó rápidamente que el muchacho estaba muerto y cubrió su cara con un lienzo rojo.

39. Ese mismo día, las fuerzas de seguridad también dispararon con munición real a un hombre de 36 años —casado, padre y carpintero— que protestaba por las acciones de las fuerzas de seguridad para poner fin a la huelga de los trabajadores portuarios. El Relator Especial vio fotos de ese hombre tomadas inmediatamente después de que le dispararan en el abdomen. Murió en una ambulancia de camino al hospital.

40. Las fuerzas de seguridad dispararon a un tercer hombre en la pierna el 19 de febrero en Mandalay. Murió el 23 de febrero mientras estaba detenido por la junta. La junta insiste

en que murió a causa de la COVID-19, pero el Relator Especial recibió informes creíbles que indicaban que la muerte del hombre podía haberse debido a la denegación intencionada de tratamiento médico para su herida en la pierna mientras estaba detenido. Esa muerte no solo puede considerarse un asesinato, sino también una tortura. El Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ha destacado anteriormente que ha quedado bien establecido en numerosas decisiones del Comité contra la Tortura y otros órganos de control pertinentes que la tortura puede cometerse por omisión⁷.

41. El Relator Especial ha visto fotografías que muestran a soldados de la 33ª División de Infantería Ligera que participaron en la respuesta de las fuerzas de seguridad a los manifestantes en Mandalay el 20 de febrero, entre ellos soldados con fusiles de francotirador. Según los analistas de seguridad, las divisiones de infantería ligera, incluida la 33ª División, pueden desplegarse como unidades móviles directamente subordinadas al Comandante en Jefe. La 33ª División de Infantería Ligera tiene un historial de participación en abusos de derechos humanos, incluida la participación en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y violencia sexual contra civiles rohinyá en el estado de Rakáin en 2017, y contra civiles en el estado de Kachín y en el norte del estado de Shan.

42. Según el personal sanitario presente en Mandalay el 19 de febrero, las fuerzas de seguridad hirieron al menos a 40 personas; la mayoría tenía heridas de arma de fuego.

Un hombre asesinado en Rangún

43. El 12 de febrero, en el marco de una amnistía general, el Consejo de Administración del Estado liberó a más de 23.000 presos condenados por delitos. Tras su liberación, el Relator Especial recibió numerosos informes de agresiones y robos, acompañadas de casos no verificados de incendios intencionados y vandalismo. En un caso grabado en vídeo, los habitantes del municipio de Sanchaung, en Rangún, detuvieron a cuatro personas que dijeron que les habían pagado para irrumpir en hogares por la noche.

44. En todo el país se han creado comités de vigilancia vecinal debido al temor fundado a los asaltos y las actividades delictivas de presuntos apoderados de la junta y a las redadas nocturnas y detenciones arbitrarias dirigidas por la policía. Los vecinos comparten información sobre los movimientos de los soldados y de la policía, y sobre la presencia de individuos desconocidos. Cuando ven a la policía o a posibles apoderados en su barrio, los residentes golpean cacerolas para avisar a los vecinos.

45. Un hombre de 30 años, casado y con un hijo de 5 años, era uno de esos centinelas voluntarios del barrio en las afueras de Rangún. El 20 de febrero, estaba haciendo guardia cuando llegó la policía después de una discusión entre él y un grupo de personas simpatizantes de los militares. Según los testigos, llegó al lugar un vehículo de policía sin identificación oficial y la víctima preguntó a los policías por qué motivo estaban en el barrio. Entonces la policía le insultó y, según se informa, le disparó tres veces, una de ellas en la cabeza, resultando muerto al instante. El Relator Especial ha visto fotografías de la víctima con la herida mortal en la cabeza. Según información recibida, el análisis *post mortem* concluyó que la bala había entrado por la parte posterior de la cabeza y había salido por el ojo derecho, lo que indica que le habían disparado por detrás. Al parecer, la policía se ha negado a abrir una investigación.

Al menos 18 personas resultaron muertas en Rangún, Dawei, Mandalay, Myeik, Bago y Pokokku, el 28 de febrero de 2021

46. El 22 de febrero, la junta pronunció públicamente en la televisión estatal la siguiente declaración: “Los manifestantes están incitando ahora a la población, en especial a adolescentes y jóvenes más vulnerables emocionalmente, a emprender un camino de confrontación en el que podrían perder la vida”. El 25 de febrero, los participantes en una contramanifestación respaldados por los militares agredieron de forma violenta a los manifestantes, sobre todo en Rangún, apuñalando y golpeando a personas desarmadas en escenas caóticas en las calles de la ciudad. Posteriormente, a partir de la noche del 25 de febrero, las fuerzas de seguridad de Myanmar iniciaron una represión más intensa. La policía

⁷ A/HRC/13/39/Add.5, párr. 31.

de Rangún cargó contra los manifestantes sin previo aviso y utilizó gases lacrimógenos y balas de goma, tácticas que ya se habían utilizado fuera de Rangún.

47. El 28 de febrero, las fuerzas de seguridad de Myanmar aumentaron drásticamente el uso de la fuerza letal contra los manifestantes al menos en seis ciudades del país. El Relator Especial recibió informes fidedignos de asesinatos, en particular por las fuerzas policiales y militares que dispararon contra centenares de manifestantes en la ciudad sudoriental de Dawei, dispararon contra manifestantes que huían en Mandalay y mataron a una mujer aparentemente al azar mientras caminaba por la calle, y lanzaron ataques letales contra manifestantes en Rangún.

48. Estas muertes más recientes demuestran que las fuerzas de Myanmar están cometiendo asesinatos de forma sistemática en todo el país. Es poco probable que las fuerzas de seguridad, ubicadas en distintos lugares, hayan cometido estos asesinatos el mismo día sin la aprobación expresa de los más altos dirigentes de la junta, incluido Min Aung Hlaing. A medida que se realicen las investigaciones, la responsabilidad debe hacerse extensiva a los más altos cargos de la cadena de mando, de conformidad con el derecho internacional.

B. Uso desproporcionado de la fuerza

49. El Relator Especial vio decenas de vídeos e imágenes que mostraban a las fuerzas de seguridad de Myanmar haciendo un uso excesivo de la fuerza, por ejemplo, golpear brutalmente a personas desarmadas, utilizar de forma ilegal armas menos letales como hondas, balas de goma y cañones de agua, y disparar a la población con munición real mientras disolvían protestas y detenían a personas. Se produjeron actos violentos contra manifestantes y funcionarios en huelga, al menos en Myitkyina y Waingmaw, en el estado de Kachín; Naipyidó; numerosos lugares de la región de Mandalay; Mawlamyine, en el estado de Mon; Myawaddy, en el estado de Kayín; Myaungmya, en la región de Ayeyarwady, y Rangún.

50. Por ejemplo, casi desde el inicio del golpe de Estado, la policía de Mandalay sancionó el uso de fuerza excesiva. Según un memorando autenticado de la policía de Mandalay, de 3 de febrero, los agentes de policía tenían instrucciones de “disparar” a los manifestantes “con una escopeta antidisturbios del calibre 12 si se manifestaba una persona sola” y “con un arma antidisturbios de 38 mm si los manifestantes estaban entre una multitud”⁸. El memorando no dice nada respecto a la protección del derecho de reunión pacífica. Además de los muertos y heridos por disparos el 28 de febrero y en el astillero de Yadanarbon, la policía de Mandalay ha perpetrado otras numerosas agresiones contra personas, como la brutal paliza que recibió un hombre de 21 años con parálisis cerebral. El incidente, captado en un vídeo que vio el Relator Especial, muestra a un grupo de policías de Myanmar golpeando brutalmente con palos al hombre desarmado.

51. Los provocadores de las contramanifestaciones, respaldados por los militares, también han agredido a los manifestantes, sobre todo en Rangún, desde el 25 de febrero. El Relator Especial recibió informes fidedignos que indicaban que las fuerzas de seguridad y las entidades afiliadas al ejército habían prestado apoyo a los contramanifestantes violentos. En concreto, la policía retiró al parecer las barricadas de un lugar de protesta en Rangún, facilitando encuentros violentos con los manifestantes en favor de la democracia. Al parecer, algunos participantes violentos en la contramanifestación llegaron a zonas de Rangún en autobuses pertenecientes a Myanmar Economic Holdings Limited, un conglomerado de propiedad militar. El Relator Especial recibió múltiples informes, algunos de ellos respaldados por vídeos y fotografías, que indicaban que unos provocadores habían agredido y apuñalado a manifestantes en favor de la democracia a plena luz del día en Rangún el 25 de febrero, sin que la policía respondiera.

52. El Relator Especial recibió imágenes de vídeo del 27 de febrero que mostraban a las fuerzas de seguridad y a personas vestidas de civil golpeando brutalmente a manifestantes desarmados en Monywa, región de Sagaing. Además de las matanzas, la violencia perpetrada

⁸ Fortify Rights, “Myanmar: rescind order to use force against protesters, protect basic freedoms”, 5 de febrero de 2021. Disponible en www.fortifyrights.org/mya-inv-2021-02-05/.

el 28 de febrero se saldó al menos con 30 heridos por uso excesivo de la fuerza, algunos con heridas de arma de fuego no letales.

C. Reclusión arbitraria

53. En el momento de redactar este informe, la junta ha privado de libertad de forma arbitraria a más de 1.200 personas desde el inicio del golpe de Estado. Entre los presos políticos se encuentran miembros de la LND, parlamentarios, funcionarios de la Comisión Electoral, activistas políticos, miembros de la sociedad civil, funcionarios, periodistas, abogados, docentes, médicos, estudiantes y personalidades. La junta emitió órdenes de detención al menos contra otras 32 personas que, al parecer, se han escondido. En el momento de redactar este informe, las autoridades han declarado culpables al menos a 4 de las 900 personas privadas de libertad y las han condenado a penas de entre siete días y dos años de prisión.

54. Desde el golpe de Estado, la policía, el ejército, autoridades vestidas de civil y funcionarios del Departamento de Administración General, por ejemplo todos los administradores de municipios y distritos, han practicado detenciones arbitrarias.

55. Las fuerzas de seguridad detuvieron de forma arbitraria a diversas personas durante las protestas y en sus domicilios durante redadas nocturnas ilegales sin previo aviso ni orden judicial, en ocasiones vendándoles los ojos. Cuando esas personas estaban privadas de libertad, las fuerzas de seguridad confiscaban sus teléfonos, y cortaban así la comunicación con sus familiares, abogados y otras personas. En la inmensa mayoría de las detenciones, no hay indicios de acusaciones contra esas personas. La mayoría de las familias de las personas privadas de libertad no recibieron ninguna información de las fuerzas de la junta sobre el bienestar o el paradero de sus familiares. Por tanto, muchas de esas reclusiones pueden equivaler a una desaparición forzada.

Grupos específicos

56. *Liga Nacional para la Democracia.* Se estima que la Consejera de Estado Aung San Suu Kyi, el Presidente Win Myint y casi todo el Comité Ejecutivo Central de la Liga Nacional para la Democracia están privados de libertad. Según se informa, tanto Aung San Suu Kyi como Win Myint comparecieron ante un tribunal mediante una videoconferencia el 16 de febrero y el 1 de marzo. Aung San Suu Kyi ha sido acusada en virtud de la Ley de Gestión de Desastres Naturales por violar presuntamente las restricciones impuestas a causa de la COVID-19 mientras hacía campaña; en virtud de la Ley de Importaciones y Exportaciones por posesión de radiotelefonos portátiles; en virtud del artículo 67 de la Ley de Telecomunicaciones por posesión de un aparato de telecomunicaciones sin licencia; y en virtud del artículo 505 b) del Código Penal por incitación a los disturbios. Win Myint ha sido acusado en virtud de la Ley de Gestión de Desastres Naturales y del artículo 505 b) del Código Penal. Según se informa, la próxima audiencia para ambos está fijada para el 15 de marzo. Muchas otras personalidades de la LND han sido acusadas, algunas de las cuales han comparecido en audiencias secretas ante un juez sin acceso a representación letrada. La policía de Myanmar también ha realizado redadas nocturnas en las oficinas y la sede del partido, en particular el 9 de febrero, cuando confiscaron su sistema informático. La junta está trabajando de forma sistemática para dismantelar la dirección y el partido de la LND.

57. *Funcionarios y organizadores de protestas.* Las fuerzas de seguridad de Myanmar llevaron a cabo decenas de detenciones arbitrarias de organizadores de base del movimiento de desobediencia civil. Las fuerzas de seguridad privaron de libertad a funcionarios públicos, entre ellos médicos, abogados, policías, docentes, y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Planificación, Finanzas e Industria.

58. *Comisión Electoral de la Unión de Myanmar.* Las fuerzas de seguridad privaron de libertad a altos funcionarios de la Comisión Electoral, así como a funcionarios de nivel medio y bajo en muchos estados y regiones.

59. Estas reclusiones arbitrarias masivas violan los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que prohíben, respectivamente, la detención y la reclusión

arbitrarias; establecen que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal, y disponen que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

60. En el momento de redactar este informe, las familias de las personas privadas de libertad el 1 de febrero llevan casi cuatro semanas sin recibir información sobre el bienestar y el paradero de los familiares reclusos. Cuando una persona es privada de libertad por agentes del Estado, o con su aquiescencia, y no hay reconocimiento oficial ni información sobre su bienestar y paradero, se considera una desaparición forzada⁹. El prolongado período sin comunicación ni información sobre el paradero de las personas reclusas en Myanmar está generando una seria probabilidad de posibles desapariciones forzadas masivas.

D. Restricciones legales a los derechos civiles y políticos

61. Desde que los militares tomaron el poder en contravención de la ley, el Consejo de Administración del Estado ha emitido decretos draconianos para modificar las leyes vigentes, establecer nuevos reglamentos e imponer su voluntad a las empresas de telecomunicaciones, todo ello de forma ilegítima y vulnerando los derechos de la población a la libertad de expresión, a la libertad de reunión y asociación pacíficas y al acceso a la información.

Libertad de expresión

62. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos protege el derecho a la libertad de expresión. Para que las restricciones al derecho a la libertad de expresión sean legales, deben estar previstas en la ley, aplicarse solo en circunstancias específicas para proteger los derechos y la reputación de otros, o para proteger la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas, y deben ser necesarias y proporcionadas. La proporcionalidad debe interpretarse, en parte, como el medio menos restrictivo para lograr cualquiera de los objetivos legítimos mencionados.

63. Desde el 1 de febrero, el Consejo de Administración del Estado ha impuesto ilegítimamente nuevas leyes a la población de Myanmar para limitar en gran medida su libertad de expresión. Incluso antes del golpe de Estado, varias leyes del país vulneraban el derecho a la libertad de expresión, y ahora se aplican con una frecuencia alarmante para justificar la privación de libertad de personas.

64. Las leyes nuevas y las preexistentes no se han redactado con la suficiente precisión para que la población entienda lo que es lícito y lo que no; son demasiado imprecisas y amplias para lograr cualquier objetivo legítimo de restricción de la libertad de expresión, e incluyen penas de prisión desproporcionadas.

Código Penal

65. Sin autoridad alguna, el Consejo de Administración del Estado introdujo numerosas modificaciones en el Código Penal con el fin de prever graves consecuencias para cualquier persona que critique a la junta o exprese opiniones que la junta haya declarado falsas. La junta modificó los artículos 121, 124 y 505 a) del Código Penal, introduciendo duras sanciones y penas de prisión más largas para los siguientes actos: a) actuar o incitar a la acción contra los servicios de defensa o las fuerzas del orden (pena máxima de 20 años); b) intentar lograr que un empleado público pierda el respeto por el gobierno o dificultar el desempeño de sus funciones (pena máxima de siete años); c) causar o intentar causar temor entre un grupo de ciudadanos o entre la población en general (pena máxima de tres años); d) difundir o intentar difundir noticias falsas (pena máxima de tres años); e) cometer o

⁹ Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, art. 2, y www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26842&LangID=E.

intentar cometer un delito contra un empleado público o incitar, directa o indirectamente, a alguien a cometerlo.

66. Estos nuevos artículos y modificaciones que se han introducido en el Código Penal reprimen las críticas a la junta y de hecho tipifican como delito las actividades de los manifestantes. Cualquier persona que se manifieste en contra de la junta militar puede incurrir en responsabilidad penal. Por su formulación, las modificaciones introducidas en el Código son aplicables a los funcionarios que se unen al movimiento de desobediencia civil, a los que alientan a los funcionarios a unirse y quienes les prestan apoyo.

67. Además, la junta está utilizando las disposiciones draconianas existentes en el Código Penal para reprimir la libertad de expresión. Por ejemplo, el artículo 505 b) del Código Penal tipifica como delito el discurso que pueda causar “temor o alarma a la población” o que motive a otros a alterar la “tranquilidad pública”. La Junta ha utilizado el artículo 505 b) para privar de libertad al menos a 45 personas desde el golpe de Estado.

Ley de Transacciones Electrónicas

68. El 9 de febrero, el Consejo de Administración del Estado presentó un proyecto de ley de ciberseguridad que fue muy criticado por los proveedores de telecomunicaciones. En lugar de promulgar esa ley, el 15 de febrero, sin previo aviso, el Consejo anunció la introducción de modificaciones ilegítimas a la Ley de Transacciones Electrónicas de 2004.

69. Las modificaciones incluyen las problemáticas disposiciones del proyecto de ley dirigidas a los usuarios individuales de las comunicaciones electrónicas y amenazan aún más la libertad de expresión y el derecho a la privacidad de la población de Myanmar. En concreto, una de las modificaciones tipifica como delito el hecho de generar en línea “información errónea” (también traducida como “noticias falseadas”) y “desinformación” (también traducida como “noticias falsas”) con la intención de causar el pánico entre la población, una pérdida de confianza o la división social, y establece una pena máxima de tres años de prisión.

70. La ley no define las expresiones esenciales “información errónea”/“noticias falseadas”, “desinformación”/“noticias falsas”, “pánico entre la población”, “pérdida de confianza” o “división social”, y deja que el Consejo de Administración del Estado las interprete a su conveniencia. La disposición podría, en efecto, autorizar a la junta a condenar a cualquier persona que escribiera o publicara información en línea con la que no estuviera de acuerdo o que considerara amenazante. La ley también tipifica como delito el intercambio de información personal en línea sobre otras personas sin su consentimiento, que conlleva una pena máxima de tres años, y el acceso no autorizado a información con la intención de perjudicar las relaciones exteriores, que conlleva una pena mínima de tres años y una máxima de siete. En virtud de estas dos últimas disposiciones, las personas podrían ser objeto de sanciones penales por compartir información sobre presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad de Myanmar o del Consejo de Administración del Estado, o por documentar y difundir a la comunidad internacional casos de abusos de derechos humanos.

71. La Ley de Transacciones Electrónicas otorga a las fuerzas de seguridad una amplia autoridad de vigilancia y amplias excepciones respecto de la protección de datos personales cuando se dedican a captar, investigar y organizar información relacionada con asuntos de ciberseguridad y ciberdelincuencia que afectan a la estabilidad, la tranquilidad y la seguridad nacionales del Estado. En la Ley no se definen las expresiones “estabilidad”, “tranquilidad” y “seguridad nacional”, lo que ofrece plena discreción y autoridad a la junta para obtener datos sobre cualquier persona en Myanmar a su conveniencia. Estas disposiciones no exigen ningún requerimiento judicial, ni especifican limitaciones sobre la cantidad o el tipo de datos que las fuerzas de seguridad pueden recoger, lo que vulnera las leyes y normas internacionales de derechos humanos.

La libertad de expresión y los medios de comunicación

72. El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos protege el derecho a la libertad de expresión, incluido el derecho a recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. El Consejo de

Administración del Estado impone graves restricciones a la libertad de expresión de la población de Myanmar e intenta desorganizar el movimiento de desobediencia civil y el flujo de información a la sociedad civil mediante diversas interrupciones de Internet.

73. Los militares comenzaron a interrumpir las telecomunicaciones a primera hora de la mañana del 1 de febrero, junto con las maniobras del golpe de Estado, y la red de Internet permaneció parcialmente interrumpida durante la mayor parte del día. Mediante directivas posteriores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se ordenó a los proveedores de servicios que bloquearan Facebook, que en Myanmar sirve, básicamente, como Internet para gran parte de la población. En los días siguientes, se bloquearon otras plataformas de medios sociales, como Instagram y Twitter, y la junta ordenó cierres de Internet en todo el país.

74. Desde el 15 de febrero, la junta ha impuesto un toque de queda en todo el país, con cierres diarios de Internet desde la 01.00 horas hasta las 09.00 horas. La conectividad nacional durante estos cierres nocturnos se mantiene entre el 12 % y el 14 % de los niveles diurnos habituales, ya que algunos usuarios de Mytel y algunas redes privadas virtuales informan de que tienen acceso a Internet. Estos cierres proporcionan impunidad a las fuerzas de seguridad que llevan a cabo detenciones y violentas represiones durante toda la noche, e impiden la organización lícita de la comunidad. En el momento de redactar este informe, la junta había inhabilitado el acceso a Internet en todo el país por 15ª noche consecutiva. Aunque Internet suele restablecerse por completo después de las 09.00 horas, las restricciones diurnas en las redes sociales y en determinados sitios web, como Wikipedia, siguen aumentando.

75. Las prohibición general de utilizar Internet durante la noche, con el propósito de interrumpir el movimiento de desobediencia civil y de ocultar las detenciones ilegales nocturnas, no son proporcionadas, necesarias ni legítimas (véase el párrafo 62).

76. El Consejo de Derechos Humanos ha afirmado que condena de forma inequívoca las medidas destinadas a impedir u obstaculizar deliberadamente el acceso a información en línea, en contravención del derecho internacional de los derechos humanos. Las prohibiciones generales que impone la junta al uso de Internet y a la libertad de expresión hacen necesaria esta condena.

Libertad de prensa

77. La libertad de prensa, que afrontaba dificultades antes del golpe, está siendo atacada desde el 1 de febrero. Las fuerzas de seguridad han privado de libertad arbitrariamente al menos a 30 periodistas desde el golpe de Estado. El 11 de febrero, las fuerzas de seguridad detuvieron a un periodista independiente, que permanece en régimen de incomunicación desde su detención. El 14 de febrero, en un incidente en el estado de Kachín, los militares detuvieron a cinco periodistas de varias organizaciones de prensa de Myanmar. Fueron puestos en libertad al día siguiente solo después de ser obligados a firmar un documento en el que declaraban que no violarían el artículo 144 del Código de Procedimiento Penal. El 26 de febrero, las fuerzas de seguridad detuvieron a un periodista japonés en Rangún y lo pusieron en libertad horas después. El 1 de marzo, las fuerzas de seguridad privaron de libertad de forma arbitraria a otros periodistas.

78. Además de las detenciones arbitrarias, los periodistas han afrontado también la intimidación y el acoso de funcionarios y agentes vestidos de civil. En Mandalay y Rangún, las fuerzas de seguridad y los provocadores partidarios de los militares agredieron a los periodistas con palos y porras. En Naipyidó y Rangún, las fuerzas de seguridad dispararon balas de goma y munición real contra los manifestantes; un periodista recibió un disparo en la espalda con una bala de goma. Muchos periodistas se han escondido, están bajo la vigilancia de la junta o abandonan abiertamente el periodismo. La detención, la reclusión y la intimidación de periodistas pueden tener un grave efecto disuasorio.

79. Por último, las restricciones de la Junta a la libertad de expresión y de reunión vulneran los derechos de los periodistas. El toque de queda de 20.00 horas a 04.00 horas impuesto en virtud del artículo 144 restringe la libertad de movimiento de los periodistas y su capacidad para informar sobre las detenciones nocturnas. El corte forzoso de Internet de la 01.00 horas a las 09.00 horas, que restringe Facebook, Twitter y los sitios web de los

medios de comunicación, también limita la capacidad de los periodistas para recibir y difundir información.

80. El 11 de febrero, el Ministerio de Información emitió una directiva para los periodistas en la que advertía a los medios de comunicación que no se refirieran al Consejo de Administración del Estado como “gobierno golpista”, “gobierno militar” o “consejo militar”, ya que el Consejo había tomado el poder legítimamente. El Consejo subrayó que pronto empezaría a emprender acciones legales contra quienes siguieran utilizando las palabras prohibidas. Cuarenta organizaciones de medios de comunicación independientes de Myanmar publicaron una carta en la que rechazaban la petición por considerar que violaba su derecho a informar y emitir libremente.

Derecho a la privacidad

81. La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala en su Artículo 12 que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, y que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Mediante las modificaciones introducidas en las leyes vigentes, la junta se ha asegurado de tener una capacidad casi ilimitada para llevar a cabo registros e incautaciones, en violación del derecho a la privacidad.

Modificaciones introducidas en la Ley de Protección de la Intimidad y la Seguridad de los Ciudadanos

82. El 13 de febrero, el Consejo de Administración del Estado modificó, sin tener la debida autoridad, la Ley de Protección de la Intimidad y la Seguridad de los Ciudadanos, eliminando disposiciones esenciales que en teoría, aunque no siempre en la práctica, proporcionaban a la población de Myanmar una protección fundamental frente a los registros, las incautaciones, la vigilancia y la reclusión arbitraria e indefinida no razonable. Con la eliminación de estas protecciones, la Junta da cobertura legal a las fuerzas de seguridad para: a) recluir indefinidamente a personas sin la autorización de un tribunal (suspendiendo así el *habeas corpus* en Myanmar); b) entrar en la residencia privada de una persona con fines de registro, incautación o detención; c) vigilar, espiar o investigar a cualquier ciudadano según su conveniencia; d) interceptar comunicaciones; e) exigir u obtener datos personales de telefonía y comunicaciones electrónicas de los operadores de telecomunicaciones; f) abrir, examinar, confiscar o destruir la correspondencia privada de una persona; g) interferir en los asuntos personales o familiares de una persona y h) confiscar o destruir los bienes de una persona. La Constitución y el Código de Procedimiento Penal siguen prohibiendo muchas de estas actividades.

Modificaciones introducidas en la Ley de Administración de Distritos Urbanos o Rurales

83. El 13 de febrero, el Consejo de Administración del Estado introdujo modificaciones ilegítimas en la Ley de Administración de Distritos Urbanos o Rurales, restableciendo una disposición de la Ley que el Gobierno de la Liga Nacional para la Democracia había derogado y que obligaba a los ciudadanos a comunicar a la administración de su municipio los huéspedes que pernoctarían en su domicilio con el fin de autorizar su viaje y visita. El restablecimiento de ese requisito de notificación, combinado con la autoridad preexistente para que los administradores municipales registren los domicilios a fin de comprobar la “prevalencia de la ley y el orden” y mantener la “disciplina”, viola el derecho a la privacidad y otorga al Consejo de Administración del Estado amplias facultades de registro e incautación. Además, las modificaciones añadían una disposición que permitía que los funcionarios de los municipios solicitaran autorización a la junta para sustituir a los administradores elegidos de los distritos y pueblos.

Derecho de reunión y asociación pacíficas

84. Como se ha señalado anteriormente, el 8 de febrero el Consejo de Administración del Estado dictó una orden de emergencia por la que se prohibían las manifestaciones, las protestas y las concentraciones de cinco o más personas en zonas públicas y se establecía el toque de queda de las 20.00 horas a las 04.00 horas. La junta dictó la orden en virtud del

artículo 144 del Código de Procedimiento Penal, que autoriza a un juez a dictar una orden de emergencia por la que se ordena a cualquier persona que se abstenga de realizar un acto determinado si el juez “considera que esa instrucción puede evitar, o tiende a evitar, una obstrucción, una molestia o un perjuicio, o el riesgo de obstrucción, molestia o perjuicio, a cualquier persona empleada legalmente, o un peligro para la vida, la salud o la seguridad de las personas, o la perturbación de la tranquilidad pública, o un disturbio, o una reyerta”. El incumplimiento de la orden se castiga con hasta seis meses de prisión en virtud del artículo 188 del Código Penal.

85. La prohibición extremadamente amplia de celebrar reuniones de más de cinco personas impuesta por la junta y el toque de queda nocturno violan el derecho de reunión y asociación pacíficas consagrado en el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

86. Al igual que en el caso de la libertad de expresión, la junta está utilizando disposiciones excesivamente amplias que estaban en vigor antes del golpe de Estado para privar de libertad a personas conculcando su derecho de reunión pacífica. Entre el 1 y el 25 de febrero, la junta privó de libertad al menos a 15 personas en virtud del artículo 19 de la Ley de Reunión Pacífica y Manifestación Pacífica por organizar una protesta contra los militares. El artículo 19 tipifica como delito el hecho de no obtener autorización previa para una protesta, de comportarse de forma que pueda “destruir el gobierno” o bienes públicos o privados o contaminar el medio ambiente, y de hablar o comportarse “de forma que pueda afectar al país o la Unión, la raza o la religión, la dignidad humana y los principios morales”. Estos términos excesivamente amplios e indefinidos violan el derecho de reunión pacífica, dado que no son lo suficientemente precisos como para permitir que los miembros de la sociedad de Myanmar decidan la manera de regular su conducta, y porque las leyes confieren una discrecionalidad ilimitada o generalizada a los funcionarios de Myanmar encargados de su aplicación.

87. La junta restringió aún más la libertad de reunión y asociación al prohibir la mayoría de los sindicatos. Los sindicatos se han convertido en una fuerza importante para movilizar la participación de los trabajadores en la huelga general del movimiento de desobediencia civil. El 26 de febrero, la Junta anunció que había prohibido (sin la debida autoridad) al menos 16 sindicatos por no estar debidamente registrados en virtud de la Ley de Organización del Trabajo y amenazó con emprender acciones legales contra ellos si no respetaban la prohibición. El Relator Especial ha recibido numerosos informes que indican que los dirigentes sindicales están escondidos y que la policía y los militares realizan registros puerta a puerta en sus domicilios y residencias.

V. Conflicto armado, protección de los civiles y desplazamientos desde el golpe de Estado

88. El Relator Especial recibió informes fidedignos que señalan enfrentamientos entre el Ejército de Myanmar y las organizaciones étnicas armadas, así como de ataques diarios con mortero y disparos del Ejército de Myanmar contra las minorías étnicas en los estados de Kayín, Shan y Kachín. El 20 de febrero, el Equipo Directivo del Proceso de Paz, que engloba a las 10 organizaciones étnicas armadas que han firmado el Acuerdo de Alto el Fuego Nacional, emitió una declaración en la que condenaba colectivamente el golpe de Estado, pedía la puesta en libertad de los dirigentes civiles y anunciaba la suspensión de todo diálogo político con los militares de Myanmar.

89. El Ejército de Myanmar intensificó los ataques contra las zonas pobladas por civiles en las aldeas de Kayín desde el golpe de Estado, y en las semanas anteriores y posteriores a éste los ataques desplazaron por la fuerza a más de 7.000 civiles, incluidos unos 5.000 en los municipios de Butho, Dwelo y Luthaw, en el distrito de Papun, y 1.500 en los municipios de Mone y Lerdoth, en el municipio de Nyaunglebin. Desde el golpe, los ataques del ejército de Myanmar han desplazado a unos 3.500 civiles kayín. Según los informes, los frecuentes bombardeos y la amenaza de ser utilizados como mano de obra forzosa han causado la huida de los civiles. El Relator Especial recibió informes de que el ejército de Myanmar estaba

aumentando los efectivos y los suministros en la zona, con la llegada de más de 100 camiones de suministros en el norte del estado de Kayín.

90. Desde que se produjo el golpe de Estado, el Relator Especial ha recibido información sobre enfrentamientos armados en varios municipios del estado de Shan, como Kyaukme, Hsipaw, Muse y Namtu. Estos combates han tenido como resultado el desplazamiento de 2.290 nuevas personas desde el 1 de febrero. Entre ellos, los enfrentamientos entre las fuerzas armadas de Myanmar y el Consejo de Restauración del Estado de Shan/Ejército del Estado de Shan en el municipio de Hsipaw, los enfrentamientos entre las fuerzas armadas de Myanmar y el Partido Progresista del Estado de Shan/Ejército del Estado de Shan en el municipio de Muse, y entre el Consejo de Restauración del Estado de Shan/Ejército del Estado de Shan y las fuerzas aliadas del Partido Progresista del Estado de Shan/Ejército del Estado de Shan y el Ejército de Liberación Nacional Ta'ang en los municipios de Hsipaw, Namtu y Kyaukme. Durante los combates del 15 de febrero en Kyaukme, un proyectil cayó en una aldea, resultando muertos una mujer, embarazada de ocho meses, y un hombre, y heridos otros seis civiles.

91. El 5 de febrero, los combates entre las fuerzas armadas de Myanmar y el Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar en los municipios de Lashio y Laukkaing, en el norte del estado de Shan, causaron la muerte de nueve civiles y heridas a ocho, entre ellos niños.

92. Según se informa, desde el golpe de Estado, las fuerzas armadas de Myanmar han atacado al Ejército para la Independencia Kachín —que nunca firmó el Acuerdo Nacional de Alto el Fuego— en múltiples ocasiones en el municipio de Muse, en el norte del estado de Shan. El Relator Especial recibió informes de combates, incluidos bombardeos de mortero del Ejército de Myanmar y una ofensiva terrestre, que incluía a la 99ª División de Infantería Ligera, los días 10, 21 y 22, y 26 de febrero. Según se informa, el 21 de febrero un hombre del municipio de Muse resultó muerto a causa del impacto de metralla de mortero.

93. Las comunidades del estado de Rakáin informaron de su preocupación por la violencia relacionada con las protestas a escala nacional, ya que, al parecer, se celebraron pequeñas protestas en favor del golpe en Sittwe y pequeñas protestas en contra del golpe en Ann, Thandwe, Taungup y otros lugares. A principios de febrero de 2021, representantes del ejército de Myanmar visitaron los campamentos de internamiento del municipio de Sittwe, donde las autoridades han confinado a más de 125.000 civiles rohinyá desde 2012. Los representantes del ejército se reunieron con los comités de gestión de los campamentos y les encargaron que informaran a los desplazados internos de que no debían participar en ninguna protesta y de que, si lo hacían, se tomarían medidas contra ellos. Los militares también encargaron a los comités de gestión de los campamentos de Sittwe que velaran por que en los campamentos se cumplieran las medidas de confinamiento de la COVID-19 e impidieran el acceso desde el exterior.

94. El Ejército de Arakán no se ha pronunciado públicamente sobre el golpe de Estado. Tras casi dos años de conflicto armado entre el Ejército de Arakán y el de Myanmar, los combates entre los ejércitos cesaron en su mayor parte tras las elecciones generales de 8 de noviembre de 2020. Sin embargo, continuaron los incidentes de bajas civiles, en particular las muertes y lesiones causadas por las minas terrestres. El 4 de febrero, un niño de 14 años resultó muerto y otros dos resultaron heridos por la detonación de munición sin explotar en el municipio de Buthidaung y, según se informa, el 17 de febrero, un hombre resultó herido por la explosión de una mina terrestre en el municipio de Ann.

95. A 7 de febrero, más de 101.000 personas seguían desplazadas en los estados de Rakáin y Chin como consecuencia de los combates entre las fuerzas armadas de Myanmar y el Ejército de Arakán. No es posible establecer contacto con esas personas, algo más de 24.000, debido a restricciones en materia de seguridad y acceso. Ante la prolongada calma en el conflicto desde principios de noviembre, los asociados humanitarios están estudiando posibles maneras de acceder a ellas.

96. El Ejército Unido del Estado de Wa —la mayor organización armada étnica del país— ha guardado un notable silencio durante la presente crisis.

VI. Repercusiones en el acceso humanitario

97. El golpe de Estado militar ha obstaculizado de muchas maneras la entrega de ayuda humanitaria en los estados étnicos. En el momento de redactar este informe, los militares aún no habían establecido nuevas instrucciones o requisitos adicionales para el acceso humanitario. Sin embargo, siguen existiendo los anteriores problemas de acceso.

98. La asistencia humanitaria a los desplazados en el estado de Kayín se está llevando a cabo en gran medida con proveedores locales, y el Relator Especial recibió información de que los proveedores de servicios necesitaban mayor apoyo logístico, especialmente en previsión de una esperada ofensiva militar de Myanmar contra las aldeas de Kayín.

99. La mayor parte de la ayuda humanitaria en las zonas de conflicto del norte del estado de Shan se presta mediante organizaciones no gubernamentales nacionales y organizaciones de la sociedad civil. La asistencia inmediata continúa principalmente a través de los asociados locales en respuesta a los nuevos desplazamientos causados por los enfrentamientos entre las fuerzas armadas de Myanmar y las organizaciones étnicas armadas. Sin embargo, algunos trabajadores humanitarios señalan las dificultades para retirar dinero de los bancos con el fin de hacer transferencias de efectivo a los nuevos desplazados internos.

100. En el estado de Kachín, la mayoría de las organizaciones humanitarias han limitado temporalmente sus actividades presenciales desde el golpe de Estado. Los trabajadores humanitarios de la zona también informan de las dificultades para acceder al dinero en efectivo de los bancos, y la conectividad de las comunicaciones, más lenta o intermitente —por teléfono e Internet—, está dificultando la gestión a distancia de las actividades. Preocupa que el acceso a las zonas no controladas por el gobierno se vea aún más restringido y pueda quedar bloqueado por completo.

101. Algunas organizaciones pudieron mantener las comunicaciones en sus zonas de responsabilidad, entre ellas, los estados de Rakáin, Chin, Kayah y Kayín y las regiones de Bago y Tanintharyi. Los trabajadores humanitarios lo consiguieron mediante mecanismos comunitarios de protección previamente establecidos, así como con los socios humanitarios presentes en las aldeas, los campamentos de desplazados internos y los lugares de desplazamiento.

102. En el estado de Rakáin, las organizaciones humanitarias han reanudado progresivamente la ayuda vital a los civiles rohinyá, rakáin y chin tras un breve período de “espera”. Los asociados para la alimentación y la salud fueron de los primeros en restablecer los servicios. Sigue existiendo un proceso de autorización de viaje, ya de por sí oneroso, y los socios prevén retrasos tras el golpe.

103. Varias organizaciones humanitarias de la sociedad civil en el estado de Rakáin informaron de que después del golpe de Estado habían interrumpido sus actividades programáticas para evaluar los riesgos y garantizar la seguridad de su personal. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, los asociados humanitarios internacionales han trasladado una mayor responsabilidad a los socios nacionales y a las organizaciones de la sociedad civil. Los trabajadores humanitarios nacionales y las organizaciones de la sociedad civil estarán más expuestos a los riesgos.

104. Además, la repercusión del creciente movimiento de desobediencia civil es muy amplia y también afecta a las operaciones humanitarias. Funcionarios de departamentos y ministerios esenciales del gobierno se han unido al movimiento, lo que ha ralentizado los procesos administrativos, incluida la revisión de las autorizaciones de viaje, la emisión de visados y permisos de entrada y la aprobación de las listas de pasajeros de los vuelos de socorro. El Ministerio de Salud y Deportes y muchos hospitales funcionan con poco personal. Las perturbaciones en el sector bancario también han causado una crisis de liquidez para las operaciones y la programación de las organizaciones.

VII. Repercusiones en el derecho al retorno

105. En 29º período extraordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, celebrado el 12 de febrero, la junta afirmó que seguiría esforzándose por repatriar a los

rohinyá de Bangladesh y que trataría de lograr el retorno de los desplazados internos rohinyá en el centro del estado de Rakáin “de inmediato”. En realidad, los civiles de etnia rohinyá desplazados por los crímenes atroces masivos cometidos en 2012, 2016 y 2017 no parecen estar más cerca de regresar a sus hogares para reconstruir sus vidas. Lo mismo se puede decir de los civiles de Rakáin y Chin desplazados por el conflicto armado en los últimos años. Además, una repatriación rápida de los rohinyá al estado de Rakáin en las condiciones actuales probablemente no cumpliría los principios de un retorno voluntario y sostenible y en condiciones de seguridad y dignidad.

106. Al parecer, la junta tiene previsto cerrar los campamentos de desplazados internos del estado de Rakáin, empezando por el de Kyauk Ta Lone, cuyo cierre estaba previsto desde hace tiempo. Este cierre no se ajusta a las normas internacionales, ya que no permitirá que los desplazados internos regresen a sus hogares o a sus lugares de origen. En cambio, las autoridades se limitarán a trasladar a los residentes a una vivienda en el mismo lugar, mientras les prohíben trabajar.

VIII. Respuesta internacional al golpe de Estado

A. Estados miembros y organizaciones internacionales

107. Numerosos países y organizaciones internacionales condenaron rotundamente el golpe de Estado, aunque solo algunos han tomado medidas concretas para presionar a la junta militar y sus intereses económicos¹⁰. El Canadá, los Estados Unidos de América y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte impusieron sanciones iniciales dirigidas a los oficiales militares y exmilitares directamente responsables del golpe de Estado o asociados a la junta, como los que forman parte del Consejo de Administración del Estado. Nueva Zelandia suspendió los compromisos políticos y militares de alto nivel con Myanmar. En el momento de escribir este informe, la Unión Europea había anunciado que estaba dispuesta a imponer sanciones, pero aún no lo había hecho.

108. A 2 de marzo, los intereses económicos de los militares seguían sin ser cuestionados por los Estados miembros, con la excepción de los Estados Unidos, que ha puesto en el punto de mira a dos filiales mineras propiedad del conglomerado militar Myanmar Economic Holdings Limited y ha bloqueado el acceso a 1.000 millones de dólares de fondos del Estado de Myanmar depositados en los Estados Unidos. El Reino Unido anunció que suspendía temporalmente toda promoción comercial con Myanmar mientras ponía en marcha un examen de su enfoque del comercio y la inversión en el país. Los Estados miembros también han comenzado a investigar sus programas de formación y proyectos de desarrollo en Myanmar para determinar los verdaderos beneficiarios. Los Estados Unidos, Nueva Zelandia, Suiza y el Reino Unido y han suspendido o reorientado la financiación para garantizar que la sociedad civil reciba ayuda, mientras que la Unión Europea suspendió su programa de formación de la policía, que estaba en marcha desde 2016. Noruega congeló su ayuda bilateral a Myanmar, que ascendía a unos 8 millones de dólares para 2021. El Japón también está considerando la posibilidad suspender la ayuda para el desarrollo.

109. El Grupo del Banco Mundial anunció que había suspendido los desembolsos de sus operaciones en Myanmar y que estaba reforzando la supervisión de los proyectos que ya estaban en marcha¹¹.

110. El 1 de febrero, la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental emitió una declaración conjunta en la que alentaba a “proseguir el diálogo, la reconciliación y la vuelta a la normalidad de conformidad con la voluntad y los intereses de la población de Myanmar”¹². El 2 de marzo reiteró su posición, y Malasia pidió por separado la “pronta e incondicional

¹⁰ Véase el anexo I que contiene un gráfico con las sanciones económicas y la suspensión de la ayuda de los Estados miembros desde el golpe de Estado.

¹¹ “Developments in Myanmar”, declaración, 19 de febrero de 2021. Disponible en www.worldbank.org/en/news/statement/2021/02/01/developments-in-myanmar.

¹² Disponible en <https://asean.org/asean-chairmans-statement-developments-republic-union-myanmar/>.

puesta en libertad de los dirigentes políticos”, incluidos Aung San Suu Kyi y Win Myint¹³. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Singapur calificó de “inexcusable” la violencia de las fuerzas de seguridad contra civiles desarmados y señaló que “habrá graves consecuencias adversas para Myanmar y la región” si la situación sigue agravándose¹⁴. El 24 de febrero, Tailandia recibió al Ministro de Relaciones Exteriores nombrado por los militares en reuniones con el Ministro de Relaciones Exteriores y el Primer Ministro de Tailandia, el primer compromiso de la junta en el extranjero desde el golpe de Estado. La Ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia también se reunió con el representante de la junta en Tailandia. Afirmó la intención de Indonesia de comunicarse con todas las partes, incluido el Comité que representa a la Pyidaungsu Hluttaw¹⁵.

B. Comunidad empresarial internacional

111. El movimiento de desobediencia civil y las organizaciones internacionales de derechos humanos han iniciado campañas internacionales para la imposición de sanciones al Consejo de Administración del Estado y al ejército de Myanmar y sus intereses comerciales. La mayoría de las organizaciones insta a que las sanciones se adapten de modo que tengan la máxima repercusión en la junta y sus intereses económicos y, al mismo tiempo, una repercusión mínima en la población de Myanmar, en particular respecto del acceso a alimentos, agua, prendas de vestir y atención médica. Antes del golpe, la misión internacional independiente de investigación sobre Myanmar concluyó de forma inequívoca que hacer negocios con el ejército de Myanmar, o con cualquiera de las empresas vinculadas a los militares, era incompatible con la protección o la promoción de los derechos humanos.

112. Desde el golpe de Estado, cada vez son más las empresas internacionales que anuncian cambios importantes en sus operaciones en Myanmar¹⁶. Kirin Holdings, asociado con Myanmar Economic Holdings Limited en una empresa conjunta, ha anunciado sus planes de poner fin a esa asociación. TRD Singapore, una empresa que vende equipos contra drones, canceló las próximas ventas a Myanmar y anunció que dejaría de suministrar esos productos a los militares. Vero, empresa de relaciones públicas activa en Indonesia, Myanmar, Tailandia y Viet Nam, ha confirmado que dejará de representar a empresas de propiedad militar. Korean Air Cargo se trasladará del complejo de lujo Myawaddy Bank, propiedad de Myanmar Economic Holdings Limited, a una nueva ubicación. Puma Energy, que opera la mayor terminal de importación de combustible de Myanmar y una empresa conjunta de combustible para aviones con la empresa estatal Myanmar Petroleum Products Enterprise, ha suspendido todas sus operaciones, alegando razones de seguridad. La empresa australiana Woodside Petroleum anunció la desmovilización de su equipo de perforación en Myanmar, tras haber calificado inicialmente el golpe de Estado como una “cuestión de transición”¹⁷. Otros, como el fabricante de acero Posco International, con sede en la República de Corea, asociado con Myanmar Economic Holdings Limited en una empresa conjunta, ha expresado su preocupación y está considerando la posibilidad de seguir el precedente de Kirin Holdings¹⁸.

¹³ Véase <https://asean.org/storage/FINAL-Chairmans-Statement-on-the-IAMM.pdf> y www.pmo.gov.my/wp-content/uploads/2021/03/YAB-PM-MEDIA-STATEMENT_MYANMAR.pdf.

¹⁴ “MFA spokesperson’s comments on the situation in Myanmar”, 20 de febrero de 2021. Disponible en www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and-Photos/2021/02/20210220-mfa-spokesperson-comment-myanmar.

¹⁵ “Press briefing on the outcome of the visit to Bangkok”, 24 de febrero de 2021. Disponible en <https://kemlu.go.id/portal/en/read/2192/berita/minister-for-foreign-affairs-of-indonesia-press-briefing-on-the-outcome-of-the-visit-to-bangkok>.

¹⁶ Véase en el anexo II que contiene un gráfico en el que se describe la desvinculación de particulares y empresas internacionales respecto de los negocios relacionados con el ejército desde el golpe de Estado.

¹⁷ Sonali Paul, “Australia’s Woodside CEO says Myanmar coup won’t affect exploration plans”, Reuters, 19 de febrero de 2021.

¹⁸ Business & Human Rights Resource Centre, “Posco’s response”, 15 de febrero de 2021. Disponible en www.business-humanrights.org/en/latest-news/poscos-response/.

113. Facebook ha tomado medidas para limitar la distribución de contenidos por los militares prohibiendo todos los medios de comunicación del Estado y del ejército de Myanmar, y las páginas controladas por los militares tanto en Facebook como en Instagram, así como los anuncios pagados por empresas vinculadas a los militares. Sin embargo, la prohibición no incluía las páginas de las compañías vinculadas a los militares.

IX. Conclusiones y recomendaciones

A. Conclusiones

114. La población de Myanmar está sufriendo el derrocamiento ilegal de su gobierno y la brutal represión de un régimen militar autoritario. No obstante, se ha levantado en oposición como un conjunto diverso pero poderosamente unificado. El movimiento de desobediencia civil no violenta está demostrando que es notablemente eficaz, ya que extrae su fuerza orgánica de los deseos inquebrantables y democráticos de la población. De hecho, al parecer este país nunca ha estado tan unido.

115. Aunque el futuro de Myanmar lo determinará su población, la comunidad internacional debe actuar con urgencia y decisión para apoyarla. Lo que está en juego reviste la máxima importancia. El Relator Especial espera que la comunidad internacional esté a la altura de este momento histórico siguiendo el ejemplo y la inspiración de la población de Myanmar, y que la justicia, la dignidad y los derechos humanos prevalezcan.

B. Recomendaciones

116. El Relator Especial recomienda a la junta militar que:

- a) Deje de usar una fuerza excesiva y letal contra la población de Myanmar;
- b) Respete el derecho de reunión pacífica y de asociación de la población de Myanmar;
- c) Abandone el poder que asumió mediante un golpe de Estado ilegal;
- d) Ponga en libertad, incondicionalmente, a todas las personas que fueron objeto de reclusión ilegal; ponga fin a la persecución y el enjuiciamiento de la población de Myanmar por ejercer sus derechos humanos; y permita que se reúna el parlamento legítimo y democráticamente elegido y se constituya un gobierno;
- e) Conceda acceso inmediato, seguro y sin trabas a los proveedores de asistencia humanitaria y para el desarrollo a todas las comunidades necesitadas y permita que toda la población de Myanmar, incluidas las minorías étnicas, se desplace sin restricciones innecesarias, y en particular que tenga acceso sin trabas a servicios y medios de subsistencia;
- f) Permita el acceso sin restricciones a los observadores de los derechos humanos, incluidos la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar y el Enviado Especial del Secretario General para Myanmar;
- g) Ponga fin de forma permanente a la persecución de periodistas, defensores de los derechos humanos y otras personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, y ponga en libertad a todas las personas que se encuentren recluidas por realizar actividades legítimas. Desestime todas las acusaciones por motivos políticos que contravengan los derechos humanos, incluidos los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. Garantice la reparación de todo daño psicológico o físico causado a esas personas.

117. El Relator Especial recomienda al ejército de Myanmar y a las organizaciones étnicas armadas que:

- a) Dejen de desplegar fuerzas militares en las zonas que son objeto de disputa y observe un alto el fuego en todo el país;
- b) Pongan fin a las violaciones contra la población civil, incluidos los asesinatos selectivos e indiscriminados, las violaciones, los incendios intencionados, los desplazamientos forzados, los trabajos forzados y los daños a bienes civiles y objetivos no militares;
- c) Garanticen pleno acceso a los agentes humanitarios que prestan ayuda vital a las personas necesitadas; Establezcan un mecanismo de autorización de viaje más predecible y eficiente para los trabajadores de ayuda humanitaria; y permitan que los medios de comunicación y los observadores de los derechos humanos tengan libre acceso a las zonas afectadas por el conflicto y la violencia e informen de sus conclusiones.

118. El Relator Especial recomienda a las Naciones Unidas que:

- a) Reúnan urgentemente al Consejo de Seguridad para que evalúe la situación en Myanmar, en particular la escalada de violencia de la policía y las fuerzas de seguridad contra la población de Myanmar, e invoquen su autoridad en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para:
 - i) Imponer un embargo de armas mundial;
 - ii) Imponer sanciones económicas selectivas contra el ejército de Myanmar y sus fuentes de ingresos;
 - iii) Remitir la situación de Myanmar a la Corte Penal Internacional con el fin de que investigue y posiblemente enjuicie los crímenes atroces que se han producido, incluidos el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad;
- b) Nieguen el reconocimiento de la junta militar como gobierno legítimo que representa la población de Myanmar.

119. El Relator Especial recomienda a los Estados miembros que:

- a) Establezcan un régimen de sanciones económicas multilateral y coordinado en el que las naciones acuerden imponer sanciones selectivas tanto a los altos dirigentes de la junta como a sus asociados, así como a sus fuentes de financiación, en particular contra las empresas de propiedad militar y Myanmar Oil and Gas Enterprise, que actualmente está controlada por la junta militar y representa la mayor fuente de ingresos del Estado;
- b) Recurran a las autoridades nacionales de lucha contra el blanqueo de dinero y a otras autoridades financieras, según proceda, para bloquear o congelar todas las cuentas en el extranjero de todas las entidades del Estado hasta que se restablezca un gobierno legítimo, a fin de garantizar que la junta no desvíe los fondos públicos de Myanmar;
- c) Se unan a los 41 países que ya han impuesto embargos de armas al ejército de Myanmar;
- d) Utilicen toda la influencia para alentar a los Estados que no imponen un embargo de armas a Myanmar a que lo establezcan, y examinen opciones para que rindan cuentas quienes siguen permitiendo estas ventas;
- e) Se aseguren de que las naciones no estén participando en la retransferencia ilegal de armas, incluida la tecnología de doble uso, a la junta;
- f) Nieguen el reconocimiento de la junta militar como gobierno legítimo que representa la población de Myanmar.

120. El Relator Especial recomienda que los donantes humanitarios y de desarrollo, incluidas las Naciones Unidas, los bancos internacionales de desarrollo, los Estados miembros y las organizaciones de la sociedad civil, trabajen directamente con la sociedad civil local y las organizaciones de ayuda siempre que sea posible para apoyar de forma directa a las poblaciones, en lugar de hacerlo a través de los mecanismos centralizados que ahora controla la junta.

Annex I

Member States imposition of economic sanctions and suspension of aid to Myanmar since the coup (as of 1 March 2021)

| No. | Country or union | Actions |
|-----|------------------|--|
| 1 | Canada | Imposed sanctions against nine military officials, bringing the total number of individuals sanctioned by Canada to 54. The previous trade embargo on arms, related material, and technical and financial assistance still stands. ¹ |
| 2 | European Union | Has announced it is ready to adopt sanctions targeting those directly responsible for the coup and their economic interests. Suspended the Mypol program, ² which has trained and equipped Myanmar's military-controlled police since 2016, ³ as well as the EU-funded Myanmar Sustainable Aquaculture Program. ⁴ |
| 4 | New Zealand | Suspended all high-level political and military contact with Myanmar. All current and future aid programs will not include projects that are delivered with, or benefit, the military. A travel ban on military leaders is also in the works. ⁵ |
| 5 | Switzerland | Temporarily suspended aid payments to investigate if their projects are managed by the military or benefit it in any way. ⁶ |
| 6 | United Kingdom | Imposed sanctions against nine military officials, bringing the total number of individuals sanctioned by the United Kingdom to 23. ⁷ The UK suspended all aid directly or indirectly involving the Myanmar government and will temporarily suspend all trade promotion with Myanmar as it launches a trade and investment review. ⁸ |
| 7 | United States | Designated 12 individuals responsible for the coup and or associated with the military regime. These former and current military officials along with three military-owned subsidiaries are under sanctions. ⁹ USAID redirected US \$42 million of assistance away from projects that would have benefited the Myanmar government to civil society. ¹⁰ Blocked access to ~\$1 billion in Myanmar government funds held in the United States. |

¹ "Canada imposes sanctions on Myanmar military officials in response to coup d'état," Government of Canada, 18 February 2021, <https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2021/02/canada-imposes-sanctions-on-myanmar-military-officials-in-response-to-coup-detat.html>.

² "EU Statement on MYPOL," MYPOL, 18 February 2021, <http://www.mypol.eu/eu-statement-on-mypol/>.

³ "EU suspends training of military-controlled Myanmar police force," Burma Campaign UK, 7 February 2021, <https://burmacampaign.org.uk/eu-suspends-training-of-military-controlled-myanmar-police-force/>.

⁴ "EU-funded MYSAP aquaculture program suspended following Myanmar coup," *Seafood Source*, 18 February 2021, <https://www.seafoodsource.com/news/aquaculture/eu-funded-mysap-aquaculture-program-suspended-following-myanmar-coup>.

⁵ "New Zealand takes measures against Myanmar following military coup," Government of New Zealand, 9 February 2021, <https://www.beehive.govt.nz/release/new-zealand-takes-measures-against-myanmar-following-military-coup>.

⁶ "Switzerland temporarily suspends aid payments to Myanmar," *Swiss Info*, 18 February 2021, <https://www.swissinfo.ch/eng/switzerland-temporarily-suspends-aid-payments-to-myanmar/46381184>.

⁷ "Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK," Office of Financial Sanctions

Implementation, 25 February 2021,

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/964719/Burma.pdf.

⁸ “UK sanctions further Myanmar military figures for role in coup,” Government of the United Kingdom, 25 February 2021, <https://www.gov.uk/government/news/uk-sanctions-further-myanmar-military-figures-for-role-in-coup-february-25-2021>.

⁹ “United States Targets Leaders of Burma’s Military Coup Under New Executive Order,” US Department of Treasury, 11 February 2021, <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0024>.

¹⁰ “USAID Immediately Redirects \$42 Million in Response to the Military Coup in Burma,” USAID, 11 February 2021, <https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/feb-11-2021-usaid-immediately-redirects-42-million-response-military-coup-burma>.

Annex II

Non-exhaustive list of individuals and international companies disengaging from Myanmar and from military-affiliated enterprises since the coup

| <i>No.</i> | <i>Company or individual</i> | <i>Country</i> | <i>Background</i> | <i>Action</i> |
|------------|------------------------------|------------------|--|---|
| 1 | Axiata Group | Malaysia | Subsidiary edotco Group owns 3,150 towers in Myanmar, some of which are leased to MEC-owned Mytel. ¹ | Axiata put off plans to sell US \$500 million stake in edotco. ² |
| 2 | Coda Pay | Singapore | Provided cardless payment services to Mytel. | Coda removed Mytel from its portfolio of payment channels. ³ |
| 3 | HAECO Xiamen | Hong Kong, China | Signed a US \$4.8 million contract with Aero Sofi Co. Ltd. for VIP luxury refurbishment of an Airbus A319-112 once used by Myanmar Airways International. ⁴ | After the coup, HAECO informed OCCRP that the contract had been terminated in January 2021. ⁵ |
| 4 | Kirin Holdings | Japan | Joint venture partner in Mandalay Brewery and Myanmar Brewery with MEHL. | Kirin will terminate both ventures by the spring or within a year. ⁶ |
| 5 | Korean Air Cargo | South Korea | Rented office in Myawaddy Bank Luxury Complex, which is owned by MEHL. ⁷ | Korean Air will move its office to a new location. ⁸ |
| 6 | Lim Kaling | Singapore | Owned a one-third stake in RMH Singapore Pte. Ltd., which operates joint venture Virginia Tobacco Company with MEHL. | Decided to dispose of his stock in the company and exit the investment in response to the coup. ⁹ |
| 7 | Posco International 1 | South Korea | Joint ventures partner with MEHL in Myanmar Posco C&C Company Ltd. and Myanmar Posco Steel Company Ltd. | Posco has suspended dividends until MEHL proves previous dividends were not used for purposes that violated human rights. If proven otherwise, Posco will consider a thorough review its joint ventures and might follow the precedent of Kirin Holdings. ¹⁰ |
| 8 | Transworld Group Singapore | Singapore | Used Ahlone International Port Terminal 1, which is owned by MEC. | Transworld Group will no longer use military-owned ports in Yangon. ¹¹ |

| No. | Company or individual | Country | Background | Action |
|-----|-----------------------|---------------------------------------|---|---|
| 9 | TRD Singapore | Singapore | Sold Orion-7 drone signal disruptor to the Myanmar police. | TRD Singapore cancelled a deal to sell anti-drone products to Yangon International Airport and will not supply Myanmar with anti-drone products while under the regime. ¹² |
| 10 | Vero | Thailand, Vietnam, Myanmar, Indonesia | Public relations firm. | Vero will no longer represent military-owned companies. ¹³ |
| 11 | Woodside Petroleum | Australia | Has one of the largest offshore petroleum acreage holdings in Myanmar. Partners with Total and MRPL E&P in a joint venture developing A-6, Myanmar's first ultra-deepwater gas project. | Woodside will de-mobilize its entire offshore exploration drilling team and halt any business decisions until the situation has improved. ¹⁴ |

¹ "Nodes of Corruption, Lines of Abuse," Justice For Myanmar, 20 December 2020, https://jfm-files.s3.us-east-2.amazonaws.com/public/JFM_Nodes_of_Corruption_high_res.pdf.

² "Myanmar's Axiata Group shelves plans for sale of stake in tower unit," *Reuters*, 25 February 2020, <https://www.reuters.com/article/axiata-results/malaysias-axiata-group-shelves-plans-for-sale-of-stake-in-tower-unit-idUSL1N2KV0FB>.

³ "Coda Pay Removed From 'Dirty List,'" Burma Campaign UK, 2 March 2021, <https://burmacampaign.org.uk/coda-pay-removed-from-dirty-list/>.

⁴ "Myanmar military Airbus deals for troop transport and luxury travel," Justice For Myanmar, 8 December 2020, <https://www.justiceformyanmar.org/stories/a-dangerous-use-of-public-funds-myanmar-military-airbus-deals-for-troop-transport-and-luxury-travel>.

⁵ "Hong Kong Firm Cancels Contract with Myanmar Military After OCCRP Investigation," Organized Crime and Corruption Reporting Project, 10 February 2021, <https://www.occrp.org/en/37-ccbog/ccbog/13827-hong-kong-firm-cancels-contract-with-myanmar-military-after-occrp-investigation>.

⁶ "Statement on the situation in Myanmar," Kirin Holdings, 5 February 2021, https://www.kirinholdings.co.jp/english/news/2021/0204_01.html.

⁷ Sales office address listed as Room No. 601 & 603, 6th Floor, Tower-B, Myawaddy Bank Luxury Complex, No.151, Wardan Street, Corner of Bogyoke Aung San Road, Lanmadaw Township, Yangon, Myanmar, https://cargo.koreanair.com/Branch-Details?airport_code=RGN.

⁸ "Korean Air to move Yangon office from military-owned offices," Burma Campaign UK, 16 February 2021, <https://burmacampaign.org.uk/korean-air-to-move-yangon-office-from-military-owned-offices/>.

⁹ "Statement by Mr. Lim Kaling on the Situation in Myanmar," Justice For Myanmar, 9 February 2021, <https://twitter.com/JusticeMyanmar/status/1358922269024681984?s=20>.

¹⁰ "Posco's Response," Business & Human Rights Resource Center, 15 February 2021, <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/poscos-response/>.

¹¹ "Transworld removed from 'Dirty List,'" Burma Campaign UK, 23 February 2021, <https://burmacampaign.org.uk/transworld-removed-from-dirty-list-will-no-longer-use-military-ports/>.

¹² "Singapore anti-drone firm cuts Myanmar ties after coup," *Reuters*, 19 February 2021, <https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics-singapore/singapore-anti-drone-firm-cuts-myanmar-ties-after-coup-idUSKBN2AJ0XF?il=0>.

¹³ "PR firms distance themselves from military as brands navigate Myanmar coup," *Provoke Media*, 5 February 2021, <https://www.provokemedia.com/latest/article/pr-firms-distance-themselves-from-military-as-brands-navigate-myanmar-coup>.

¹⁴ "Woodside statement on Myanmar," Woodside Australia, <https://www.woodside.com.au/what-we-do/international-developments-marketing-and-exploration/myanmar>.

Annex III

The Situation of Human Rights in Myanmar in 2020 and Up to the Coup d'état

Introduction

1. This report is submitted as an annex to the Special Rapporteur's main report. In this annex, the Special Rapporteur reflects on the human rights situation in 2020 and up to the military coup in Myanmar. If not for the coup d'état on 1 February, this annex would have reflected the main components of the Special Rapporteur's report to the Human Rights Council and recommendations to the Myanmar government, Ethnic Armed Organizations, and the International Community.

2. This annex also addresses the Special Rapporteurs mandate of conducting thematic research to assess compliance with the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar's recommendations. For purposes of this annex, the Special Rapporteur examines the extent to which international businesses and member states heeded the call to end business interests with Myanmar military-owned enterprises and to cease arms transfers to the military. See appendix I for charts summarizing the findings.

I. Democratic space prior to the military coup

General elections

3. On 8 November 2020, Myanmar held multi-party elections. Those deemed eligible to vote could choose candidates from a wide spectrum of political parties in addition to the ruling National League for Democracy (NLD) and the Myanmar military-affiliated Union Solidarity and Development Party (USDP). Since 2015, the political landscape has developed with new political parties and merged ethnic parties competing in elections. The ruling NLD party had a decisive electoral victory, winning 71 percent of seats in both upper (Amyotha) and lower (Pyithu) houses of Parliament. This margin provided the NLD with a more than two-thirds majority in the Union Assembly (Pyidaungsu Hluttaw). Had the parliament been allowed to convene, the NLD would have had a greater capacity than in the previous parliament to pass new legislation that would meet the commitment that was made during the second Universal Periodic Review (UPR) cycle (the third cycle), to bring all relevant statutes in line with Myanmar's international human rights obligations.¹

4. Although the general elections represented an important (and necessary) step in Myanmar's transition to a federal democracy, they were not flawless. The right to vote should extend to all regardless of ethnicity, race, and religion. Unfortunately, nearly the entire Rohingya community was disenfranchised.

5. Political party candidates were unable to engage in typical campaign activities due to COVID-19 restrictions. These restrictions presented the greatest challenge for new candidates who were seeking to introduce themselves to voters. Political parties and candidates with greater financial resources and presence on social media outpaced those with more limited resources. While the UEC provided political parties and candidates with access to state TV, only UEC-approved messaging was allowed to be broadcasted. During the campaign period, the Commission reportedly deleted parts of the speeches provided by at least two political parties, including a speech which reportedly contained reference to a UNICEF report on child poverty. Several candidates refused to participate under these conditions. This created a significant disadvantage for lesser-known candidates and political parties.

6. Additionally, out of seven Rohingya candidates who submitted nominations, only one Rohingya candidate in Yangon Region was permitted to stand for the 2020 election and no Rohingya could run in Rakhine State after all six candidates' nominations were rejected,

despite appeals to the UEC. The rejections appear to have been undertaken in a discriminatory manner based on ethnicity, where the candidates were reportedly subjected to stricter conditions and burden of proof than other candidates.

7. The absence of any Rohingya electoral candidates in Rakhine State and use of the term “Bengali” or “Kalar,” especially on social media during election campaigns, further perpetuated a hostile environment and discrimination against them. Two Muslim NLD candidates were elected to the Pyithu Hluttaw. The Special Rapporteur notes that this was a slight improvement from 2015 where no Muslim candidates contested the elections. He welcomed reports that the NLD resisted calls to replace Muslim candidates with Buddhists. When democracy is restored, he will urge the NLD to intensify efforts to ensure that Muslims and Rohingya, and all members of religious minorities in Myanmar, can freely enjoy their civil and political rights without discrimination or harassment.

8. Although there were more female candidates in 2020 compared to 2010, the proportion in this election remained at a low 16 percent.¹ This represents a significant underrepresentation of women. Temporary special measures are therefore required to ensure that Myanmar allows for a 30 percent “critical mass” of women parliamentarians in line with recommendations by the Committee on the Elimination of Discrimination against Women.¹ Furthermore, the Myanmar military has not appointed any women to the unelected seats in the parliament that the constitution sets aside exclusively for the military. This means that women would need to win almost half of the seats elected democratically to reach this standard. Additionally, the UEC had no serving female commissioners or female staff in senior positions in its secretariat. Several political parties reportedly decided to implement special measures in the absence of a normative framework at the Union level and nominated several female candidates for lower house positions.¹ This is a notable step forward and underscores the need for similar measures to ensure full participation and representation of women.

9. Persons with disabilities faced widespread discrimination in the elections. Less than a third of all polling stations in Myanmar were reportedly accessible to persons with disabilities, for example, and there is no evidence that any form of accommodation was otherwise made. A comprehensive review and assessment of obstacles to the enfranchisement of persons with disabilities should be made in close consultation with persons with disabilities and organizations of persons with disabilities. This should include the right to vote, the right to seek political office, and the right to participate fully in the political process.

10. Elections were cancelled due to alleged security reasons in several townships in Rakhine and Chin States, and in parts of Shan, Kachin, Karen, and Mon States, and Bago Region, exacerbating the affected communities’ distrust of Government. In Rakhine State, the government cancelled elections in nine townships (Pauktaw, Ponnagyun, Rathedaung, Buthidaung, Maungdaw, Kyauk Taw, Myebon, Minbya, Mrauk-U) and partially cancelled voting in four (Kyaukpyu, Ann, Sittwe, Toungup) – disenfranchising an estimated 1.2 million people or some 60 percent of eligible voters, most of whom were ethnic nationalities. Uneven information sharing on voter eligibility, rights, and procedures, as well as the non-posting of voter lists were obstacles that also reportedly prevented certain populations from exercising their political rights. There was a reported lack of transparency and consistency in the criteria of the UEC for cancelling polls due to security concerns, given that voting was also cancelled in townships in Shan State with no active armed conflict.

11. It is precisely in areas affected by hostilities that free, fair, and genuinely competitive elections are most important. For elections to be legitimately cancelled, authorities should apply the proportionality principle, whereby, in this case, security concerns were sufficiently great to offset the imperative of holding fair, inclusive elections. A ballot must always be preferable to a bullet. As in 2015, voting in non-government controlled areas (NGCA) in the north and some areas in the southeast of Myanmar reportedly did not take place. In Kachin and northern Shan states, internally displaced persons residing in government-controlled areas were generally able to vote in their areas of displacement; the National Registration and Citizenship Department (NRCD) made efforts to issue citizenship scrutiny cards (CSC) and household lists, and some flexibility was reportedly exercised around required documents and inclusion in voters’ lists. Polls were, however, cancelled in 192 village tracts (11

townships) in Kachin State, including contested areas and NGCAs. Around a reported 21,000 internally displaced people of voting age (out of 39,000 IDPs) living in Kachin NGCA, as well as in Shan and Rakhine, could not vote and faced challenges travelling to government-controlled areas.

Freedom of expression, peaceful assembly and association

12. Notwithstanding the government's legitimate concerns about controlling the spread of COVID-19, the right to peaceful assembly during election periods is particularly important. Although the right is safeguarded by Article 354(b) of the Constitution, it is undermined in practice by the Peaceful Assembly and Peaceful Procession Law. The law, which has a notification regime, includes broad legal provisions in which peaceful assemblies can be denied for vague, highly subjective reasons including that the assembly not cause "annoyance," the reciting of unapproved "chants," nor the "spread" of "rumors or incorrect information" (Article 11). Violations of these broad provisions are punishable by up to six months of imprisonment and/or a fine (Article 19).

13. During the pre-election period, the authorities detained several students who joined protest or sticker campaigns that were critical of the government or the Myanmar military, including specific government policies such as a mobile internet shutdown or the identification of abuses by the Myanmar military in Rakhine and Chin States. Convictions followed for at least 34 students, two of whom received multiple sentences of over six years' imprisonment. Two others were sentenced to more than one year. These laws and their enforcement violate the fundamental right to freedom of expression. Additionally, in November, the ILO Governing Body expressed concern over charges made against trade unionists in Mandalay for staging a protest in 2019 and the use of the law to restrict their right to freedom of assembly.¹

14. Despite the informal ceasefire between the Myanmar military and the Arakan Army, the government instructed all mobile telecommunications operators to extend suspension of 3G and 4G mobile Internet services from the lead up to Election Day until the end of March 2021. Eight townships in Rakhine and Chin States were affected, specifically in Buthidaung, Rathedaung, Mrauk-U, Ponnagyun, Myebon, Kyauktaw, Minbya, and Paletwa. The Special Rapporteur notes that this arbitrary restriction, which has been in place for more than a year and half, represents one of the longest Internet shutdowns anywhere in the world. It is a continuing violation of the fundamental right to freedom of expression and it puts lives in serious danger. Without reliable mobile Internet access, people in Rakhine and Chin States are unable to obtain information and updates on issues that impact their lives and wellbeing, such as COVID-19 or information about the resumption of hostilities. It is also highly discriminatory, as it adversely impacts specific ethnic groups in Myanmar that live in those townships, such as Rakhine, Rohingya, Kaman, Mro, Daingnet, Khami, and Chin. Tellingly, the government announced that the suspension of Internet service would be lifted but then only permitted 2G connectivity. This allowed the claim to be made that Internet connectivity had been restored, while continuing to deny functional access.

15. States have an obligation to protect freedom of expression, offline and online, especially during election periods. Internet and telecommunications shutdowns prohibit access to, and the dissemination of, information. Restrictive policy measures formulated on the basis of overly broad justifications without due regard to the principle of proportionality runs contrary to international human rights law. For restrictions on the right to freedom of expression to be lawful, they must be provided for in law, applied only in specific circumstances to protect the rights and reputation of others, or to ensure national security, public order, public health, or public morals, and be necessary and proportionate. The broad Internet ban in Rakhine State does not meet that criteria. As of the time of writing, the Special Rapporteur had received reports that the Myanmar junta restored mobile Internet access in Rakhine State following the coup.

16. Hate speech, disinformation, and misinformation were prevalent before and after the election on social media. With the help of information classifier algorithms in the Burmese language, photo detection tools, country experts, and civil society, Facebook reported that

they were able to address most hate speech on their site. Content demotions or page removals followed. It also reported that it proactively tackled disinformation and misinformation. It reportedly launched several actions against inauthentic behavior by actors and networks allegedly linked to military propaganda, as well as the manipulation of people. They also demoted reportedly fraudulent election content. Concerns have been raised about the inconsistency of Facebook's handling of fraudulent content, including the retention of pages run by the Myanmar military, as well as the amount of time that it takes to take action. Moreover, Facebook did not act on calls from human rights defenders to stop the Myanmar military from using Facebook to recruit members and to stop the Myanmar military from promoting its businesses, including subsidiaries belonging to Myanmar Economic Holdings Limited and Myanmar Economic Corporation on Facebook. These companies' profits from help fund the military, which engages in atrocity crimes. As of the time of writing, even post-coup, these businesses continue their presence on Facebook, including Innwa Bank, Royal Spornainment Complex, Hanthawaddy Golf Course, and others.

17. Military and state authorities targeted journalists and media professionals for prosecution during the election campaign. Legal actions brought against them were commonly based on vague sections in the Telecommunication Law or Penal Code, typically Sections 66(d) and 505(b) respectively. Interventions by the Myanmar Press Council¹ on some of the actions that the Myanmar military initiated against the media have led to charges being dropped. The same provision, Section 66(d) of the Telecommunication Law which outlaws the legally undefined action of defamation, is also frequently used to file charges against private citizens. In total, it is reported that during the current legislative period, 539 lawsuits have been brought against 1,051 individuals, 495 of whom are civilians, and 326 activists, and 67 journalists/media professionals. Significant reform will be required for Myanmar to meet international standards.

Political Prisoners

18. Regrettably, arbitrary detentions increased in 2019 and 2020. Throughout 2020, the increase in political prisoners was due primarily to peaceful protests and activism, land disputes, and armed conflict. As of December 2020, there were a reported 601 political prisoners. Forty-two were incarcerated while 559 were awaiting trial, 196 of whom remained in detention. This is a dramatic 74 percent increase from the 345 political prisoners at the beginning of 2019, which included 33 incarcerated persons, 78 awaiting trial inside prison, and 234 awaiting trial outside prison. The number of political prisoners rose steadily throughout the first half of 2019 and plateaued around 600 individuals until gradually decreasing to 507 individuals in the first half of 2020. The decrease in numbers was short-lived as the Government continued to abuse the restrictive colonial- and military-era sections 66(d) and 505(b) to arrest and convict journalists, student and labor activists, farmers, civilians with alleged ties to ethnic armed organizations, and others for the remaining duration of 2020. See appendix II for a chart showing the increase in political prisoners from 2016 to 2020.

19. The Government continued to grant amnesty to political prisoners throughout 2019 and 2020, though they made up a small fraction of total prisoners released. In 2019, three separate presidential pardons released 25 political prisoners along with approximately 23,000 prisoners. Among those 25 political prisoners were Kyaw Soe Oo and Wa Lone, two Reuters reporters imprisoned in 2018 for their investigation into the Inn Din massacre. In 2020, only 10 political prisoners were released in a group of 24,896 prisoners pardoned on 17 April 2020. Members of the Peacock Generation, a "thangyat" troupe imprisoned in 2019 for defaming the military in a satirical performance, and hundreds of others remain imprisoned for their political activities.

20. Arbitrary arrests and detentions significantly increased in 2021 following the military overthrow of the government. At the time of writing, reports of these detentions are increasing daily. There is a recurring pattern in which family members are not provided information on the location or well being of those detained, making these situations tantamount to enforced disappearances.

Filtering, interception, and surveillance of communications

21. Prior to the coup, worrying trends in Myanmar's surveillance efforts were emerging. Specifically, the Special Rapporteur received reports of filtering information and blocking websites, including ethnic media sites, that were critical of the government or the military, or otherwise unwelcome by the authorities. This constitutes a violation of the right to freedom of expression. Myanmar should take immediate steps to withdraw the legal provisions allowing for the blocking of websites without due process.

22. In September 2020, Justice for Myanmar, an organization publishing information on the business dealings and relationships of the country's military, had their website blocked, and mobile operators were reportedly requested to filter their name. The government relied on the draconian and overly broad legal provision in Section 77 of the 2013 Telecommunications Law to intercept, filter, survey or suspend communications. It was also used to control the use of telecommunication service and equipment without civilian oversight, due process, or judicial safeguards. This violates international human rights law. These provisions of laws should be stricken.

23. Even before the coup, plans were in place to increase the capacity for government mass surveillance and the interception of communications in Myanmar. Under a new policy, the government would be able to directly tap into the datasets of telecommunications companies without restriction or even a requirement that the company is informed which communications are being intercepted. This would significantly increase the government and Myanmar military's interception and surveillance capabilities without independent judicial oversight. This policy would create a powerful surveillance state that would make citizens vulnerable to government or military surveillance in a country with a manifestly poor legal framework to protect the right to privacy and freedom of expression. Once a democratically-elected government is restored, government leadership must cease all efforts at mass, unfettered digital surveillance.

II. Protection of civilians

Conduct of hostilities, killing, and maiming

24. Myanmar's security situation in 2020 was characterized by intensified armed conflict across Rakhine State and Paletwa Township in southern Chin State, in or near populated areas; ongoing fighting in northern Shan State; sporadic clashes in Kayin State (Karen State); and recently clashes in Bago East, with lingering impacts of conflict in Kachin State.

25. Since the conclusion of the general election on 8 November 2020, the intensity of armed clashes reduced significantly in Rakhine and Chin states, with no armed clashes reported between the Myanmar military and the Arakan Army (AA) since 12 November. The apparent thaw in relations between the warring parties and the discussions between them, however tentative, raises some hope for peace in the area.

26. Between January and October 2020, there was a marked increase in intensity of fighting in Rakhine and Chin states, with a discernible pattern of attacks against non-combatants, including the indiscriminate use of heavy weaponry in civilian areas. In 2020, at least 226 people were killed in armed conflict in Rakhine and Chin states with another 555 reported wounded. Throughout that period, the UN Human Rights Office documented a pattern of violations by the Myanmar military, including the targeted use of heavy weaponry on civilian areas, disappearances and extra-judicial killings, torture and deaths in custody, and the use of airstrikes and landmines. In September 2020, a report by the High Commissioner for Human Rights outlined that war crimes and crimes against humanity may have been perpetrated by the Myanmar military in the course of the conflict in Rakhine and Chin states and called for an investigation (A/HRC/45/5). The report outlined how attacks affected members of a wide range of ethnic groups, including Rakhine, Chin, Mro, Khumi, Kaman, Maramagyi, and Daignet people.

27. In northern Shan State, armed clashes continued between the Northern Alliance (Kachin Independence Army, the AA, Ta'ang National Liberation Army, and Myanmar National Democratic Alliance Army) and the Restoration Council of Shan State, a signatory to the National Ceasefire Agreement (NCA). The population continues to be subjected to forced recruitment, abduction, arbitrary arrest, and injuries due to landmine contamination, severely impeding movement, access to livelihoods, and compromising the civilian character of IDP camps. Despite fewer clashes during the reporting period, tensions between the Myanmar military and the Kachin Independence Army appeared to be mounting since mid-2020. Forced recruitment, however, continues in Kachin State, as well as killing, maiming, and assault.

28. The end of 2020 marked a visible change in relationships between the Myanmar military and Ethnic Armed Organisations (EAOs) in South East Myanmar. These organisations – notably the Karen National Liberation Army (also signatory to the NCA) – demanded the withdrawal of the Myanmar military's presence in the EAOs' controlled areas, citing Article 3 of the NCA. There were skirmishes between the Myanmar military and the KNLA in Kayin (Karen) State throughout 2020, which extended to the Bago East region at the end of 2020. Close to 4,000 civilians were displaced as a result. The Special Rapporteur echoes the concerns raised by many local civil society organizations regarding escalating tensions in Kayin (Karen) State and calls for the withdrawal of Myanmar military troops in these ethnic areas.

29. During the first 10 months of 2020, the Mine Risk Working Group reported 217 casualties. Rakhine State accounted for approximately 50 percent of the total number of casualties, where 108 casualties were recorded in 2020, compared to 45 in 2019, representing a 240 percent increase.¹ Shan and Kachin represented 26 percent and 10 percent of the total number of casualties respectively. In militarized and/or conflict-affected areas, arbitrary detention (short-term detention at military checkpoints, and longer-term detentions) was also reported, with some IDPs accused of association with unlawful organizations/terrorism.

30. Clashes increasingly took place in more populated areas and along main roads and waterways. As a result, there were hundreds of casualties from stray bullets, crossfire, landmines, and improvised explosive devices. Rights violations attributed to the Myanmar military and the AA were reported. The deployment of additional security forces and the setting up of new checkpoints along main roads in various townships have caused more anxiety among and difficulties for villagers, including delayed access to humanitarian aid. Use of civilian vehicles/transport and the occupation, damage to, and use of civilian properties (including schools and religious sites) by parties to the conflict were also reported. With continued restrictions on rights – including freedom of movement and access to livelihoods and basic services – and ongoing reports of harassment, arbitrary arrest and detention, forced labour, physical threats, and violence, the conflict has heightened the longstanding vulnerabilities of the Rohingya and other ethnic groups, including the Rakhine (Arakanese), Chin, Mro, Khumi, Kaman, Maramagyi, and Daignet people.

Violating the International Court of Justice provisional measures order

31. An Order by the International Court of Justice on 23 January 2020 in the case of *The Gambia v. Myanmar* instructed Myanmar to take all necessary measures to protect members of the Rohingya community from acts proscribed by the Genocide Convention. From 23 January 2020 to 22 January 2021, at least 33 Rohingya civilians were killed as a result of the conflict, with at least 39 others injured. According to information received by the Special Rapporteur, in the year following the ICJ's Provisional Measures Order, 19 Rohingya men, women and children were killed as a result of targeted or indiscriminate attacks by the Myanmar military; one was killed in a targeted killing by police; ten were killed as a result of landmines or unexploded ordnance; and two were killed in targeted killings by other unidentified armed groups. The 33 killed included 15 children and three women.

32. The following incidents are illustrative of the attacks on Rohingya civilians in 2020:

(a) On 12 February 2020, three Rohingya – two children and a civilian – were killed when a shell fired from a security outpost at a nearby bridge landed on a home in Buthidaung township;

(b) On 29 February 2020, six Rohingya civilians were killed in Mrauk-U township when the Myanmar military fired indiscriminately for an hour and a half on a Rohingya village after a vehicle in their convoy was damaged in an explosion;

(c) On 5 October 2020, three Rohingya civilian who worked as vegetable sellers, were shot dead by the Myanmar military in Minbya township after they failed to stop a boat that they were traveling in;

(d) On 5 October 2020, two Rohingya teenagers were killed by bullet wounds that were inflicted in an exchange of fire between the Myanmar military and the AA. The two teenagers were among 15 abducted by the Myanmar military in two neighboring Buthidaung township villages that morning and incurred the injuries after being used as “human shields” by the Myanmar soldiers who abducted them.

33. See appendix III for an accounting of reported killings and serious injuries against the Rohingya, in violation of the ICJ order.

34. In addition to the killings of Rohingya by the Myanmar military, scores more were injured as a result of incidents similar to those described above and Rohingya are among the thousands of people who have been internally displaced by the conflict. Those displaced have experienced severe food and other shortages during a time when Myanmar, like the rest of the world, is dealing with the COVID-19 pandemic. An internet blackout across most of the areas affected by the conflict prevented people living in these areas from receiving and sharing information during a critical time, while travel restrictions have prevented journalists and others from reporting on the conflict. At the same time, Rohingya continue to be subject to severe restrictions on movement within Myanmar and efforts continue to enforce members of the community to accept the National Verification Card, a form of identification which may preclude future efforts by individuals to access their citizenship; while a further 130,000 Rohingya IDPs – separate and distinct to those displaced by the ongoing conflict – continue to reside in camps in central Rakhine nearly nine years after those camps were established.

Arbitrary Arrests and Detentions, Torture, and Enforced Disappearances in Rakhine and Chin State

35. The armed conflict between the Myanmar military and the AA, recognized by the International Committee of the Red Cross as a non-international armed conflict, began in December 2018 in Rakhine and Chin states and expanded in scope and intensity until the general election in November 2020. The military’s longstanding strategy for fighting ethnic armed groups EOAs such as the AA is known as the “Four Cuts Policy,” so-called as it seeks to cut armed groups off from funding, food, intelligence, and recruits from the local population. Consistent patterns of attacks by the Myanmar military against non-combatants, including enforced disappearances, arbitrary arrests and detentions, torture and other cruel, inhumane or degrading treatment or punishment, and extra-judicial killings of civilians have been documented since the beginning and throughout the conflict. In keeping with the Four Cuts Policy, the Myanmar military’s strategy is to target the support of the AA from the local population, relying on demonstrative acts of violence that do not appear to distinguish between AA fighters and Rakhine civilians. While the victims of targeted attacks were largely ethnic Rakhine, other ethnic minorities, particularly Rohingya, were also targeted. In cases of arrests, detention, and extrajudicial killing, the Myanmar military seemed less concerned by any link between the suspect and the AA, rather their main focus appeared to be to instil terror among the civilian population.

36. In more than two years of fighting between the Myanmar military and the AA, there have been dozens of cases of arbitrary arrest of civilians by the Myanmar military on accusations of ties to the AA. Arrests of large groups of men were routinely documented throughout the conflict and a pattern was observed whereby arrests were carried out in villages adjoining areas where AA attacks on the Myanmar military had been carried out in the days before. According to consistent witnesses’ statements, those detained were often of fighting age and many were detained because they were not native to the village they were found in or because they had marks on their bodies consistent with crawling through vegetation, which the Myanmar military apparently interpreted as conclusive that the individuals were involved in AA manoeuvres. In several instances, entire male populations

of villages were detained and questioned. In some cases, the men were blindfolded. Instances of arbitrary detentions increased markedly in frequency following the 23 March 2020 Presidential Order that designated the AA as a terrorist organization.¹ According to local civil society, the Myanmar military arrested more than 360 civilians who were convicted or are awaiting trial, while only 78 were released.

37. In the overwhelming majority of cases of arbitrary detention investigated, torture and other ill-treatment has been documented. Detainees, family members, and lawyers relayed detailed accounts of beatings and instances of burning detainees' flesh with metal rods, the extraction of fingernails, and electrocution. For the most part, arrests were carried out by Myanmar military soldiers and torture almost exclusively in military custody. Detainees are usually held in military barracks for a period of days or weeks, when they are eventually transferred to police custody and criminal cases are initiated against them. Torture usually stopped once detainees were handed over to police. Several individuals provided information concerning loved ones who died in custody. In many of these cases, the body of the detainee was not handed over to the family. In cases where families have seen the bodies of deceased relatives, they described marks that they believed were the result of beatings and electrocution. In 2019, detainees in one instance were shown the dead body of a man that was detained with them during interrogation.

38. Myanmar military units active in northern Rakhine State have an established practice of arbitrary arrests and deaths in their custody. Between 2019 and 2020, there were nine separate instances of deaths in military custody that resulted in 20 fatalities. Twenty-three others are missing and presumed dead following a series of enforced disappearances by Myanmar military Battalion 55 in Kyauktaw township in March 2020 (described below). Given the difficulties in gathering information resulting from an Internet blackout and the ban on media access to the conflict areas, it is probable that this figure does not reflect the full extent of deaths in military custody in Rakhine State over this period. On 26 February 2020, at least 20 people were arrested – 13 women and seven men – near Taung Shay Daung Pagoda in Kyautaw township. All 13 women and one man were released shortly later, but three of the other six men died in custody. Three men were traders of small goods who had plied routes in the area for almost 20 years. One of the men was reportedly hung from a tree by his feet, beaten, and burnt with boiling water. Soldiers reportedly stabbed detainees with knives and forced them to drink noxious substances. In another incident in Mrauk U on 27 September 2020, soldiers of the military's battalion 377 stopped a taxi driver at a checkpoint and took him to the battalion base. His body was returned to his family the next day with visible wounds on his body, and with his hands and legs broken. He had been shot in the head.

39. Myanmar military Battalion 55 displayed a particularly clear pattern and practice of conduct that repeatedly amounted to serious human rights violations, including deaths in custody, enforced disappearances, and the use of torture. Three men died in custody after being detained at Taung Shay Daung Pagoda, as described above. Elements from Battalion 55 carried out a series of arrests in Tin Ma Thit and Tin Ma Gyi villages in Kyauktaw in March 2020. According to multiple eyewitnesses, soldiers took 21 individuals into custody and have since been unaccounted for. They are presumed dead one year later. Myanmar military Battalion 55 never acknowledged the detention of these individuals and never accounted for their presence. As a result, these cases amount to enforced disappearances.

Children in armed conflict

40. Violations of international humanitarian and human rights laws as well as impunity for violations in Rakhine State were pervasive during the reporting period. Serious incidents were reported, including the death of two children and the maiming of another by artillery fire in Myebon Township on 10 September, the killing of two children as they were used as human shields in Buthidaung Township on 5 October, and the death of a boy hit by an artillery shell in Mrauk-U Township on 22 October.

41. According to a UNICEF report, at least 121 incidents involving landmines, explosive remnants of war (ERW), and other explosive hazards took place in the country during the first 10 months of 2020. They killed at least 57 people and injured 160 more, indicating an upward trend in casualties in 2020 compared to 2019, when 57 people were killed and 170

injured in the course of the entire year. The highest number of casualties in 2020 was reported in Rakhine State, with 37 people killed and 71 injured. Rakhine State also accounted for the highest rate of child casualties, with 13 children killed and 34 injured, representing over 44 percent of the total number of people killed or injured across the state, compared to two children injured in Kachin State, and two killed and 18 injured in northern Shan State. Incidentally, in 2020, children represented 34 percent of casualties from landmines and unexploded ordnances (UXOs) countrywide with Rakhine State, accounting for the highest rate (44 percent) of child casualties.

42. In conflict-affected areas, armed conflict presents a significant obstacle to access to education. The majority of incidents in the reporting period took place in northern Rakhine State and Paletwa Township in neighbouring Chin State. The conflict regularly disrupted education for students in these areas.

43. While high schools briefly reopened for approximately one month between 21 July 2020 and 27 August 2020, nearly half the schools in Paletwa Township were reportedly unable to reopen due to the ongoing conflict, and experienced a shortage of teachers ahead of the new academic year, after nearly 200 teachers had applied for relocation due to insecurity in the region. After schools were forced to shut nationwide following the second wave of COVID-19, schools in Myanmar remained closed for the remainder of 2020. At present, the Ministry of Education was expected to roll out its home-based learning programmes in early 2021 to support students in continued learning for the academic year 2020/21. However, distribution of physical copies of home-based learning materials is limited to a relatively small number of townships nationwide, and it is anticipated that students from lower-income families, or living in conflict-affected and rural areas, may not be able to access home-based learning. As a result, the pandemic poses a significant risk of exacerbating existing disparities in access to education and learning outcomes.

Freedom of movement

44. The Rohingya remain cut off from livelihoods, education, and basic services due to ongoing, severe movement restrictions. Reports note impediments to accessing quality medical care were especially problematic during the COVID-19 pandemic. The inability of IDPs to temporarily return to their lands at harvest time has further undermined their self-reliance. Displaced communities have recently described being afraid of going back to their villages due to the presence of landmines within and around their villages. This creates substantial barriers to durable solutions for this oppressed community.

45. Virtually all Rohingya (excluding the very small number who hold citizenship cards) require authorization to leave Rakhine State and to travel outside of their villages or townships within Rakhine State. This time-limited authorization is exceedingly difficult to obtain, considering the administrative and financial requirements, making it unattainable for most. Permission and documentation are needed even to travel short distances from their township and/or village tracts (including to urban areas within townships), severely restricting access to livelihoods as well as basic and life-saving services. Further movement restrictions in some locations were observed with the introduction of new requirements for people to hold National Verification Cards, including for travel within townships. Rohingya can only obtain such a card if they identify themselves as “Bengali” and self-identify as non-indigenous to Myanmar.

46. As part of the Myanmar New Year presidential pardon in April 2020, authorities withdrew all charges against Rohingya arrested for travelling without documents and pardoned those convicted of the same charges. Over 880 Rohingya were consequently released from arrest or detention and returned to Rakhine State. Subsequently, it was observed that Rohingya intercepted en route within Myanmar without requisite documentation had been apprehended and then returned to Rakhine State. They were denied the right to freedom of movement and forcibly returned but charges were not filed. No official or publicly available statement was made by the authorities in this regard. The Special Rapporteur notes reports that treatment of those apprehended has also been inconsistent, ranging from timely release (in line with COVID-19 measures) to prolonged detention in

police stations, prison, or quarantine facilities. But the right to freedom of movement is being consistently denied.

47. An estimated 600,000 vulnerable, stateless Rohingya still live in Rakhine State, including some 130,000 whom the government has confined to IDP camps in central Rakhine since 2012. The cumulative effect of the armed conflict, COVID-19, and attendant measures comprising curfews and other movement restrictions as well as mobile data/internet shutdowns, exposes already vulnerable populations (including IDPs in protracted situation and ongoing new displaced populations), to even greater risks, and significantly impacts access to livelihoods and essential services. While restrictions on movement affected all communities, the Rohingya faced additional obstacles/threats – for instance, when seeking safety or accessing life-saving services at night – due to pre-existing movement restrictions. The pandemic exacerbated longstanding prejudices and negative rhetoric against the Rohingya in Rakhine State (i.e. in relation to “illegal” cross-border movements) accompanied by increased calls for the Government to control the country’s borders.

48. In Rakhine State, Rohingya and other communities of ethnic nationalities, including Rakhine (Arakanese), Chin, Mro, Khumi, Kaman, Maramagyi, and Daignet are most susceptible to extortion by state security forces when attempting to access livelihoods, services, education, or health care, not least when permission is required from authorities. Limitations on movement and other COVID-19 measures aggravated incidents of extortion. Extortion not only impedes daily activities but also compromises the already precarious safety and security situation, and overall protection/wellbeing of individuals and their community. Beset by structural poverty and formal and informal movement restrictions (including the frequent change in documentary and other requirements) that impede access to services and livelihoods, prolonged extortion erodes resilience, heightens risks of negative coping strategies (debt, gender-based violence, trafficking), and negatively impacts trust/confidence and community self-governance. Government authorities, such as local administrators, security forces (police, military), and Camp Management Committees (CMCs), have been the main perpetrators in the Rohingya camps. Incidents largely take place at checkpoints (both police and military) and in IDP camps, which includes distribution points. Those affected include men, women, and children passing through checkpoints. In IDP camps, families dependent on CMCs for approvals (to leave camps, visit clinics, or secure referral to hospitals) or for inclusion in household lists are prone to extortion perpetrated by the CMC members.

Humanitarian Access

49. Throughout 2020, humanitarian organizations had varying degrees of difficulties gaining access to crisis-affected people in targeted locations due to security challenges and government restrictions. Access constraints imposed by the government since 2016 frequently resulted in difficulties and delays in assessing needs and implementing and monitoring response activities.

50. In Kachin State, despite a lull in conflict since 2018, access for many humanitarian organizations continued to be challenging. International humanitarian organizations have had very limited access to camps in Kachin Independence Organization areas that have hosted some 40,000 displaced persons since early 2016. Local partners continued to respond in these areas, albeit in challenging circumstances, with closures of the border with China in response to the COVID-19 pandemic further complicating movement, programming, and access to markets. In addition to the government’s non-issuance of travel authorizations for aid workers, poor infrastructure and monsoon flooding further complicated efforts to reach people in need in locations across Kachin State, undermining the quantity, quality, and sustainability of assistance and services provided to IDPs and host communities.

51. Permission for humanitarian actors to access areas in Southeast Myanmar remain limited, particularly in areas controlled by EAOs, impacting delivery of assistance to displaced communities.

52. In northern Shan State, sporadic outbreaks of fighting seriously impacted the civilian population, in addition to the many of challenges noted in relation to neighboring Kachin

State. Securing travel authorization is particularly challenging for UN and INGO partners attempting to access locations hosting internally displaced persons. Organizations operating in these areas also faced challenges relating to poor infrastructure and military checkpoints.

53. In Rakhine and Chin states, national and international humanitarian organizations continued facing increasing challenges in reaching affected people despite an agreement reached with UNHCR and UNDP. Many areas were cut off due to restrictions including shifting travel authorization requirements, insecurity, landmines, or poor infrastructure. This has exacerbated already limited access in many parts of Rakhine State. Access to sites hosting people displaced by the armed conflict between the Myanmar military and the AA has been particularly challenging, especially in rural areas, with travel authorization often limited to particular sectors and granted for short periods of time, impeding the provision of quality, predictable humanitarian assistance and services.

Impact of COVID-19 on humanitarian access in Rakhine

54. The government imposed stringent measures in Rakhine State after the first locally transmitted COVID-19 case was diagnosed in the state in mid-August, which severely impacted the delivery of humanitarian aid. These measures included the full suspension of activities of humanitarian organizations whose staff tested positive, including activities such as mobile-clinic services, quarantine for primary and secondary contacts, and a requirement for frontline humanitarian staff to undergo testing before resuming their activities. The Rakhine State Government limited the humanitarian response to “essential assistance,” which initially only included activities, such as health, food support, water and sanitation, and COVID-19 response. The State Government also imposed restrictions on the movement of humanitarian personnel into and between camps and displacement sites and instructed humanitarian actors to hand over supplies to camp management committees and/or local authorities. It is reported that around half of the activities were partially disrupted and one third fully disrupted.

III. Statelessness, internal displacement and the right of return

Statelessness

55. No tangible progress was reported in improving the situation of the Rohingya with regard to their legal status and right to a nationality, or restoring citizenship in line with the Government of Myanmar’s endorsed Advisory Commission on Rakhine State recommendations. Without reform of the 1982 Citizenship Law, discrimination based on an applicant’s ethnicity – in both law and practice – continues to impede the acquisition of citizenship documentation among minority groups, with the Rohingya being the most affected.

56. Citizenship remains inaccessible to almost all Rohingya. The citizenship process continues to lack transparency and involve prohibitively high unofficial fees and burdensome evidentiary and administrative requirements. Recent trends also indicate that the Rohingya are being issued Naturalized citizenship even when eligible for full citizenship. Access to civil and citizenship documentation remains challenging countrywide, with ethnic and religious minority groups being the most, but not exclusively, affected. Several reports have highlighted numerous barriers faced by different groups across Myanmar in obtaining nationality documents, including logistical, gender-based, administrative, and cost, as well as parallel administrative systems in non-governmental controlled areas (NGCA). Measures aimed at improving access to citizenship documents, such as streamlined procedures and mobile missions, apply exclusively to persons from the 135 officially recognized ethnic groups, despite that the origins and legal nature of the “official” list remain dubious. The burden of proof rests fully on the applicant, and officers mandated to determine nationality have a high discretion on the type and number of documents that they can request the applicant to submit. This results in a complex, lengthy, time consuming, and at times arbitrary and discriminatory, process preventing disadvantaged and vulnerable groups from realizing their right to nationality.

57. The Government of Myanmar had been planning to introduce a digitized identity management system (the e-ID system) to develop a digital population registry with biometric data of all individual residents. The plan would include the issuing of smart card IDs to registered individuals verified as citizens. While this would have advantages if implemented with critical protections in place, such a system has significant disadvantages under current conditions in Myanmar. The government, the military, and the private sector allegedly collect personal biometric data without comprehensive data protection legislation in line with international human rights law. This renders people in Myanmar vulnerable to abuse of their personal information without adequate independent oversight and protection of their rights. It is therefore necessary to ensure that personal biometric and identity information is adequately protected from undue interference or manipulation, including surveillance and interception of communications, and to guarantee effective civilian oversight and procedural safeguards of the population register. Developing a digital civilian-controlled population register is corollary to adopting legislation that is in line with international human rights law. Advancing a digitized identity management system without first addressing the gaps in the laws and their implementation will not only fail to address the underlying issues, but risk entrenching existing discrimination and rights deprivations.

Internal displacement

58. Protracted and recurrent displacement, poor living conditions, dependency on humanitarian assistance, and the impact of COVID-19 on access to services and livelihoods have negatively impacted both displaced and non-displaced populations. In some cases, this has significantly exacerbated the existing challenges faced by marginalized communities. The Myanmar military-Arakan Army fighting contributed to the largest increase in displacement, with over 100,000 people displaced as of the end 2020. Humanitarian organizations project that one million people in Kachin State, northern Shan State, Rakhine State, southern Chin State, eastern Bago Region, and Kayin (Karen) State will continue requiring urgent humanitarian assistance in 2021; estimating 30 percent of IDPs as falling into the “extreme” severity of need, with close to 70 percent in the “severe” category.¹

59. In Rakhine and Chin states, close to 50,000 people were forced to flee from their homes in 2020, and by the end of the year, around 100,000 people were displaced in over 194 sites in the two states. This increase in displacement compounded challenges faced by host communities that were in many cases also affected by the conflict, including growing landmine and unexploded ordnance contamination. Hostilities also hampered access to markets and livelihoods, with roads and waterway transportation regularly blocked by the parties, particularly in Paletwa Township in Chin State and the Dar Lett Village Tract in Ann Township in Rakhine, disrupting logistics and supply chains.

60. In central Rakhine State, 130,000 people, the vast majority of whom are stateless Rohingya, 54 percent of whom are children, were confined to what can best be described as desolate internment camps. Under the best of circumstances, they had extremely limited access to healthcare, even before the onset of the COVID-19 pandemic. In total, an estimated 600,000 Rohingya live in Rakhine State under highly repressive conditions that severely limit their ability to move or make a living, let alone access health care or education for their children. Conditions for Rohingya in Rakhine State appear designed to be destructive to the survival of the community.

61. In northern Shan State, clashes between the Myanmar military and Ethnic Armed Organizations (EAOs), especially with the Restoration Council of Shan State/Shan State Army (RCSS/SSA), led to the displacement of around 8,700 people throughout 2020. Namtu and Kyaukme townships registered the highest number of internal displaced persons, with 4,000 people displaced in Kyaukme in early October alone. Civilian casualties were reported in northern Shan State due to the armed clashes, as well as explosions of landmines and ERW. An estimated 9,700 IDPs remained in protracted displacement in sites in northern Shan State.

62. Despite a decrease in clashes between Myanmar military and the KIA in Kachin State since mid-2018, landmines and explosive hazards continue to pose a deadly risk to civilians.

Nearly 96,000 people remained in IDP camps established after fighting broke out in 2011, roughly 40,000 of whom are in areas controlled by non-state armed actors.

63. Access barriers remain in Kachin and northern Shan states for some 105,000 IDPs in protracted displacement and who continue to depend on humanitarian assistance to meet their basic needs. Of particular concern was the impact of COVID-19-induced restrictions on the Chinese border, which limited access to cross-border livelihoods and provision of food assistance to IDPs in NGCAs in Kachin State. Fear of the pandemic and shrinking livelihood opportunities resulted in increased IDP movements to and from their villages of origin, including to villages in militarized and/or contested areas where armed actors' positions and explosive remnants of war contamination risks remain.

64. Implementation of the National Strategy on the resettlement of internally displaced persons remained problematic. Concerns remained around the Government's approach of prioritizing quick, visible gains and infrastructure-oriented intervention, leading to the premature closure of camps and/or return of IDPs without guarantees of voluntariness, safety, and dignity. Humanitarian landmine-clearance has yet to be undertaken as mines continue to be used, and efforts to clear mines remain dependent on the fledgling peace process and stymied by trust issues between parties to the conflict. The 2012 Farmland Law links citizenship to the right to register and acquire the right to use farmland, while the revised 2018 Vacant, Fallow and Virgin Land Management Law classifies land not being used as vacant and available for grants of use rights to other parties – compromising the housing, land, and property (HLP) rights of stateless and displaced persons.

65. The Government's approach toward the closing the Kyauk Ta Lone IDP Camp in central Rakhine State demonstrates the gap between the principles set out in the National Strategy and facts on the ground. Concerns center around possible undue influence being exerted on affected communities – mostly Rohingya Muslims – to accept the relocation plan without safeguards of rights and pathways for freedom of movement. Occupants allegedly remain confined to their sites without freedom of movement to access education, markets, or health services, including shelter and Water, Sanitation, and Hygiene interventions requiring immediate interventions in some locations.

The right of return

66. In 2020, the actual movement of IDPs to their villages of origin remained, at best, modest. In fact, rather than returning to live, many were only able to try to verify that the village continued to exist or try to undertake livelihood activities. Clearing landmines, engaging in meaningful consultations with IDPs about their interests and needs, addressing land rights, and promoting access to basic services and livelihoods remain key unresolved issues. The Special Rapporteur notes that in November and December, Government officials reportedly took steps to encourage populations displaced during the Myanmar military-AA armed conflict in several townships throughout Rakhine State to consider returning to their places of origin. These IDPs remain concerned about the resumption of clashes, the possible presence of landmines, access to services, and other relevant issues.

67. In Kachin State and, to a lesser extent, in northern Shan State, IDP movements from areas of displacement have been driven by a combination of self-initiated returns or relocations, local civil and faith-based organizations, and/or EAO arranged interventions, as well as some local Government supported programmes. Displacement fatigue on the part of IDPs and host communities, capitalizing on modest opportunities for improvement, have reportedly motivated these efforts, even if the solutions have been less than ideal or more transitory in nature.

68. In northern Rakhine State, the right of refugees to return to their original places and recover their house, land, and property further deteriorated in 2020, with reports of bulldozing and the clearing of homes and land, encroachment and confiscation of the house plots/land left behind. Additionally, Rohingya villages were subjected to reclassification, in some cases being removed from official maps. As widely reported, including a report to the Human Rights Council by the Special Rapporteur, refugee land has been used by various actors for different purposes including the development of security compounds, government buildings,

and development projects in new villages/settlements. Moreover, an apparent shift in policy was observed since the escalation of the COVID-19 cases, as “spontaneous” refugee returnees from Bangladesh previously processed under the Union Enterprise for Humanitarian Assistance, Resettlement and Development framework and permitted to return to their original or other places, instead faced charges and were sentenced for illegal entry. On the Thailand-Myanmar border, more than 120,000 refugees remained stranded in camps and unable to return, which has been exacerbated by the resumption of armed conflict between the Myanmar military and the KNLA.

IV. Ending business and arms trade with the Military

Business with the Myanmar Military

69. The Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar (FFM) published its report on the economic interests of the Myanmar military to the Human Rights Council at its 42nd session in August 2019 (A/HRC/42/CRP.3). The FFM concluded that no business “should enter into an economic or financial relationship with the security forces of Myanmar, in particular the military, or any enterprise owned or controlled by them or their individual members, until and unless they are re-structured and transformed as recommended by the [FFM].”¹

70. The Special Rapporteur can report that following the publication of the 2019 report, several companies took steps to follow the recommendations laid out by the FFM. That said, many companies continued to conduct business with military-owned enterprises and the Special Rapporteur will subsequently report his findings. The Special Rapporteur is encouraged to see many companies re-examining their business relationships following the coup. See Annex IV for a list of actions companies have taken since the August 2019 FFM report.

71. Newtec, now ST Engineering, a Belgian satellite communications company, was one of the first businesses to cut ties following the FFM report. In 2018, it supplied equipment and technology to Mytel – a network operator jointly owned by MEC and Viettel (part of Vietnam’s Ministry of Defence) – through a deal with Com & Com to launch a mobile backhaul network. In August 2019, Newtec released a statement saying it would “follow the recommendations by the UN and stop commercial ties with Mytel” by refusing requests made by Com & Com to use Newtec products and services in the Mytel network.¹

72. Maersk (Denmark), the largest shipping company in the world, announced in October 2020 that it would no longer use TMT Port, which is owned by MEHL.¹ TMT Port is jointly managed by a British company, Portia Management Services, and domestic company, KT Services.¹ Portia Management Services stated in June 2020 that it had no plans to renew its contract with the port past its expiration in 2021.¹

73. In January 2020, Western Union (US) confirmed it would be ending its contract with Myawaddy Bank, which is owned by MEHL.¹

74. Kirin Holdings, which once controlled 80 percent of Myanmar’s beer market through its joint ventures with MEHL in Mandalay Brewery Ltd and Myanmar Brewery Ltd, began taking steps in line with the FFM’s recommendations in February 2020, when it announced it met with MEHL management to discuss the issues identified in the 2019 report and requested that MEHL provide updated details on its financial and governance structures.¹ In June 2020, Kirin appointed Deloitte Tohmatsu Financial Advisory LLC to conduct an independent review of said structures to determine the destination of profits from both joint ventures.¹ Kirin eventually suspended dividend payments from Myanmar Brewery and Mandalay Brewery to MEHL in November 2020, and on 5 February announced it would be ending the joint ventures with MEHL in light of the military coup.¹

75. Rothmans Myanmar Holdings Singapore (RMHS) is a joint venture partner with MEHL in Virginia Tobacco Co. Ltd., which produces the two most popular cigarette brands in Myanmar, Red Ruby and Premium Gold. RMHS announced in December 2020 that it would be taking legal action against MEHL for “oppressive treatment” and a failure to meet

its demands for greater transparency following the release of the 2019 report. Following the coup, RMHS major shareholder Lim Kaling announced he was exiting the joint venture.¹

Transfer of Arms to Myanmar Military

76. The FFM also called for sanctions and a comprehensive arms embargo on the Myanmar military (A/HRC/42/CRP.3). In June 2020, the Human Rights Council expressed deep concern that illicit arms transfers were seriously undermining human rights (A/HRC/43/26). Several nations prohibit the sale of weapons and military equipment to Myanmar, including dual-use goods. See appendix IV for a list of countries with arms embargoes against Myanmar, which includes the United States, United Kingdom, Australia, Canada, and European Union member states.

77. From the release of the FFM report up until January 2021, numerous reports highlighted that the Myanmar military continued to purchase military infrastructure and dual use technology, including cargo aircrafts, air defence systems, drones, and radar. Moreover, international businesses continued to purchase information and communications technology from Mytel, a company run by the Myanmar military.

78. The FFM report identified sixteen state-owned and private companies that sold conventional arms and related goods to the military and seven private companies from which the military bought or attempted to buy dual-use goods and technologies from. Only two of these companies, Dejero (Canada) and Jotron (Norway), reported taking action. Dejero confirmed its newsgathering equipment had been resold to a television network in Myanmar in both 2017 and 2018. Following the recommendations of the 2019 report, Dejero instructed the reseller in August 2019 to end such business.¹ Internal investigation at Jotron revealed their Singapore-based subsidiary delivered air traffic control communications equipment to Myanmar, following Singaporean guidelines that had no restrictions on supplying dual-use goods to Myanmar at the time. However, Jotron instructed all subsidiaries to follow the guidelines set by the Norwegian Department of Foreign Affairs (which lists Myanmar as a restricted zone) instead of local jurisdiction moving forward.¹

V. Ending Land and Labour Exploitation

Forced labour

79. Forced labour, the recruitment of children, and violence against workers continued to be reported during the reporting period. A significant rise was reported in both adults and children being forced to act as porters, guides, and human shields. In northeast Kachin and northern Shan states there were numerous reports of men and teenagers intercepted outside of the camps when returning home. Despite the commitment of the Myanmar military to engage with the Country Task Force on Monitoring and Reporting (CTFMR), the death of two boys in Buthidaung Township on 5 October demonstrated continued use of children. The Myanmar military denied any responsibility for the incident.¹

80. Myanmar military-owned business conglomerates, Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) and Myanmar Economic Corporation (MEC), continued to be actively involved in business and commercial activities such as construction, mining, tourism, banking, pharmaceuticals, and insurance. After a long and devastating history of State-sponsored forced labour, the 2008 Constitution included a prohibition of forced labour in Article 359. However, the Article contains a broad provision allowing legal exception for the use of forced labor in cases of “duties assigned by the Union in accordance with the law in the interest of the public.” The constitution should be amended in order to bring it into conformity with the Forced Labour Convention, 1930 (No.29), which Myanmar ratified in 1955, and to strengthen parliamentary oversight functions relating to forced labour.¹

81. In June 2020, Myanmar ratified the Minimum Age Convention of 1973 (138). This represents a significant step forward for children, particularly in the midst of the COVID-19 pandemic. Child labour severely impairs the health, well-being, and development of an

estimated 1.13 million children across the country. The Special Rapporteur echoes the need to adopt the ILO recommended hazardous work list along with enabling regulation, to prevent the worst forms of child labour. The Special Rapporteur notes that the National Forced Labour Complaints Mechanism Committee in Nay Pyi Taw continued to work on institution building and pending cases following its establishment in February 2020. He calls for a credible national mechanism in line with the comments by ILO supervisory bodies.

Development projects, forced evictions and land grabbing

82. There were reports of forced eviction and land grabbing that were allegedly used by the government and Myanmar military to expand development projects in Myanmar in violation of the rights of individual landowners and tenancy holders. The majority of residents in informal settlements endure tenuous forms of tenure security and the pervasive threat of evictions. Land confiscation, proliferating commercial/foreign agri-business investments, and landmine contamination further impact the ability of displaced persons to return to areas of origin and reacquire use of their land.

83. In May 2020, UN-Habitat published its rapid assessment of the impact of COVID-19 on informal settlements and found that 53 percent of respondents were afraid of being evicted from their homes during the pandemic.¹ More women respondents reported eviction-related insecurity (57 percent) compared to men (49 percent). COVID-19 has brought a renewed threat of mass eviction to informal settlements, which compounds the increasing number of reports of domestic violence during lockdown and susceptibility to infection. Evictions or the threat of evictions have been related to a range of negative health outcomes, including high blood-pressure, depression, anxiety, and forms of psychological distress.

VI. Conclusion and Recommendations

Conclusion

84. **These recommendations remain relevant when democracy is restored in Myanmar and the Special Rapporteur includes them herein.**

85. **This annex demonstrates that even prior to the military coup, the Myanmar government and military violated people's rights to freedom of expression, assembly and association, and right to life, liberty, and security of person. Individuals were disenfranchised because of their ethnicity and unable to attain citizenship. Myanmar security forces engaged in arbitrary arrests, torture, and enforced disappearance just as in post-coup Myanmar. The next democratically elected government must address these glaring violations of human rights.**

Recommendations

86. **The Special Rapporteur's recommendations after the restoration of a legitimate government include:**

(a) **Initiate a process to consider fundamental changes to the constitution whereby the military is fully accountable to a legitimate democratically elected government;**

(b) **Ensure the rights to freedom of opinion and expression, peaceful assembly and association, and repeal any law that criminalizes or unduly restricts their enjoyment, online or offline, or that is used as an instrument of repression, including against land and environmental activists, artists, journalists, human rights defenders, civil servants, civil society organizations, ethnic nationalities, and displaced people. Suspend the enforcement of these laws until they can be stricken;**

(c) **Protect the right to information to ensure rapid and practical access to information of public interest;**

- (d) Urgently address the situation of armed conflict in various parts of Myanmar by ensuring a continuation of formal and informal ceasefire agreements, ending armed conflict with Ethnic Armed Organizations, taking all possible measures to avoid civilian casualties and cease the use of, and damage to, homes, schools, and religious facilities;
- (e) Address the unresolved issues involving ethnic minority states and communities including justice for the Rohingya ethnic community;
- (f) Ensure full cooperation with the proceedings at the International Court of Justice and other justice initiatives by international and domestic courts or tribunals, including the Office of the Prosecutor at the International Criminal Court, to address allegations of gross violations of international human rights and humanitarian law;
- (g) Lift all restrictions arbitrarily imposed and enforced on Rohingya that, taken as a whole, create conditions that are destructive to the Rohingya, including, but not limited to, restrictions on freedom of movement, health, education, livelihoods, and equal access to citizenship;
- (h) Invite the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to open an office in Myanmar with a broad mandate to monitor and investigate human rights violations and to provide technical support as needed;
- (i) Welcome the UN Special Rapporteur on the situation of human rights into the country, providing full cooperation and unfettered access;
- (j) Engage with persons with disabilities and organizations of persons with disabilities to fully implement the Law on the Rights of Persons with Disabilities that provides the legal framework for implementing the Convention on the Rights of Persons with Disabilities;
- (k) Ensure that the use of information technology that includes biometric data to register citizens for elections, and the use of new voting technologies, are established by law and in accordance with international standards, including the principle of non-discrimination, the right to privacy, and the rights of ethnic nationalities;
- (l) Develop a legal framework required to ensure data protection through a transparent, inclusive, and participatory consultative process with all stakeholders;
- (m) Restore full Internet and mobile connectivity in Rakhine and Chin states, repeal provisions in the 2013 Telecommunications Law that allow for arbitrary disconnection, and ensure its compliance with international law;
- (n) Undertake broad and comprehensive legal reform of laws and provisions that unduly restrict and criminalize legitimate activity, such as the Penal Code, the Official Secrets Act, the Unlawful Associations Act, the Telecommunications Law, the Law on Protecting the Privacy and Security of Citizens, the Electronic Transactions Law, the Counter-Terrorism Law, and the News Media Law;
- (o) Urgently amend the Penal Code to include a definition of torture, violence against women and other forms of sexual and gender-based violence, and of serious international crimes, including genocide, crimes against humanity, and war crimes, and include provisions for compensation and redress for victims, and for protection of witnesses;
- (p) Adopt legislation on the Prevention of Violence Against Women that covers conflict-related violence and accords adequate support to victims and witnesses. Amend or repeal laws that are not compatible with the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, including with regard to gender stereotypes inconsistent with the promotion and protection of women's rights to equality and non-discrimination. Take decisive steps to put an end to conflict-related sexual violence, including violations committed by the Myanmar military and Ethnic Armed Organizations, and develop policy measures to expressly prohibit rape and other forms of sexual violence, and to bring perpetrators to justice through fair trials;

(q) Ensure that freedom of religion and belief can be exercised and guarantee that any advocacy for or incitement to hatred and violence is effectively addressed and countered, including in print, broadcast, and social media, in line with Human Rights Council resolution 16/18 and the Rabat Plan of Action. Publicly counter dangerous nationalist and populist narratives and actively promote pluralism, tolerance, and inclusion;

(r) Permanently end the persecution of journalists, human rights defenders, or others who exercise their right to freedom of expression and release all persons held in detention for legitimate activities. Dismiss all politically motivated charges that contravene human rights, including the rights to freedom of expression, peaceful assembly, and association. Ensure that redress is provided for any psychological or physical harm caused to them;

(s) End arbitrary detention, including incommunicado detention, of people suspected of being associates of Ethnic Armed Organizations and ensure the right to a fair trial and judicial guarantees in all cases. Address torture or ill-treatment in prisons and detention settings and undertake independent and impartial investigations into any allegations of torture, ill-treatment, and deaths in custody, including those during the riot in Shwebo prison in May 2020;

(t) Take decisive steps to improve and strengthen the justice system, including by countering political influence and corruption in the judiciary, guaranteeing civilian jurisdiction over crimes committed by the military and related personnel, and guaranteeing the independence of judges and prosecutors. Undertake reforms to strengthen justice-sector capacity and guarantee full access to justice and legal aid for all people, including ethnic nationalities; and

(u) Implement the recommendations of the Subcommittee on Accreditation of the Global Alliance of National Human Rights Institutions, and amend the founding law of the Myanmar National Human Rights Commission to bring it in line with the Paris Principles.

87. The Special Rapporteur recommends the Government of Myanmar and Ethnic Armed Organizations:

(a) Cease deployment of military forces to contested areas and observe a nation-wide ceasefire;

(b) End violations against civilians, including targeted and indiscriminate killings, rape, arson, forced displacement, forced labour, and damage to civilian objects and non-military targets;

(c) Guarantee full access to humanitarian actors providing lifesaving support to people in need; establish a more predictable and efficient Travel Authorization mechanism for humanitarian aid workers; and allow for media and human rights monitors to freely access areas affected by conflict and violence and report on their findings; and

(d) Immediately stop laying landmines, ratify the Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction, clear landmines and unexploded ordnances from contaminated areas in accordance with international mine action standards, properly mark and fence contaminated areas prior to clearance activities, and carry out systematic mine-risk and education activities, and permit humanitarian mine-action organizations to engage in mine clearance activities.

Appendix I

Non-exhaustive list of international companies disengaging from Myanmar military-affiliated entities following the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar's August 2019 report (Aug. 2019–Jan. 2021)

| <i>No.</i> | <i>Company</i> | <i>Country</i> | <i>Background</i> | <i>Action</i> | <i>Date</i> |
|------------|-----------------|---------------------------|---|---|---------------|
| 1 | Dejero | Canada | According to FFM, the Tatmadaw procured dual-use Dejero data streaming equipment. Dejero confirmed its equipment was resold to a Myanmar “television network” in 2017 and 2018. | Instructed the reseller to suspend further sales of their products to Myanmar. ¹ | August 2019 |
| 2 | Esprit Holdings | Hong Kong, China, Germany | Ordered from Perfect Gains Garment Manufacturing, a factory inside Ngwe Pinlae Industrial Zone that is owned by MEHL. | Halted all future orders made to the factory. ² | August 2019 |
| 3 | Jotron | Norway | According to FFM, Jotron supplied nearly US \$45,000 in air traffic control communications equipment to the Tatmadaw. Jotron confirmed its Singapore-based subsidiary delivered the equipment to Myanmar. | Instructed its subsidiaries to comply with guidelines set by the Norwegian Dept of Foreign Affairs (Myanmar is under an arms embargo) instead of local jurisdiction. ³ | February 2020 |
| 4 | Kirin Holdings | Japan | Operated joint ventures Mandalay Brewery Ltd and Myanmar Brewery Ltd with MEHL; partner companies of Myanmar Brewery donated Ks 17.9 million (US \$12,785) to the Tatmadaw. | Appointed Deloitte to conduct review of joint ventures to determine destination of their profits; suspended dividend payments; announced ending on 5 February. ⁴ | June 2020 |
| 5 | LafargeHolcim | France, Switzerland | Lafarge (now LafargeHolcim)’s cement repacking subsidiary had leadership links with SinMinn Cement, an MEHL subsidiary. | Liquidated subsidiary. ⁵ | July 2020 |
| 6 | Maersk | Denmark | Used TMT Port, which is owned by MEHL and managed by a subsidiary of crony conglomerate KT Group of Companies. | Announced it will no longer use TMT Port. ⁶ | October 2020 |

| No. | Company | Country | Background | Action | Date |
|-----|-------------------------------------|----------------|---|--|----------------|
| 7 | Marks & Spencer | United Kingdom | Used Myanmar Wise-Pacific Yangon Co., an MEHL joint venture, as a supplier. | No longer sources from Wise-Pacific. ⁷ | August 2019 |
| 8 | Newtec (ST Engineering) | Belgium | Supplied equipment and technology to Mytel through a contract with Com & Com. | Announced it would stop all commercial ties with Mytel and refuse requests made by Com & Com to use Newtec products in the Mytel network. ⁸ | August 2019 |
| 9 | Pan-Pacific | South Korea | Joint venture Myanmar Wise-Pacific Yangon Co. with MEHL. | MWY was renamed to EO Yangon Co. Ltd. and MEHL is no longer a joint venture partner. EO Yangon is now wholly owned by EO Co. Ltd. ⁹ | September 2020 |
| | Portia Management Services | United Kingdom | Operated TMT Port in Yangon jointly with crony company KT Services. The port is owned by the military controlled Myanmar Economic Holdings Ltd. | Decided to not renew contract with KT Group (set to expire in 2021). ¹¹ | June 2020 |
| 11 | Rothmans Myanmar Holdings Singapore | Singapore | Joint venture Virginia Tobacco Co. Ltd. with MEHL. | Taking legal action against MEHL for failure to meet demands for greater transparency following FFM report. | December 2020 |
| 12 | Western Union | United States | Contract with Myawaddy Bank, which is owned by MEHL. | Ended contract with Myawaddy Bank. | January 2020 |

¹ “Response by Dejero,” Business & Human Rights Resource Centre, 16 February 2020, <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/response-by-dejero/>.

² “Fashion brands rethink Myanmar position after report on military ties,” *Nikkei Asia*, 26 August 2019, <https://asia.nikkei.com/Business/Business-trends/Fashion-brands-rethink-Myanmar-position-after-report-on-military-ties>.

³ “Response by Jotron,” Business & Human Rights Resource Centre, 16 February 2020, <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/response-by-jotron/>.

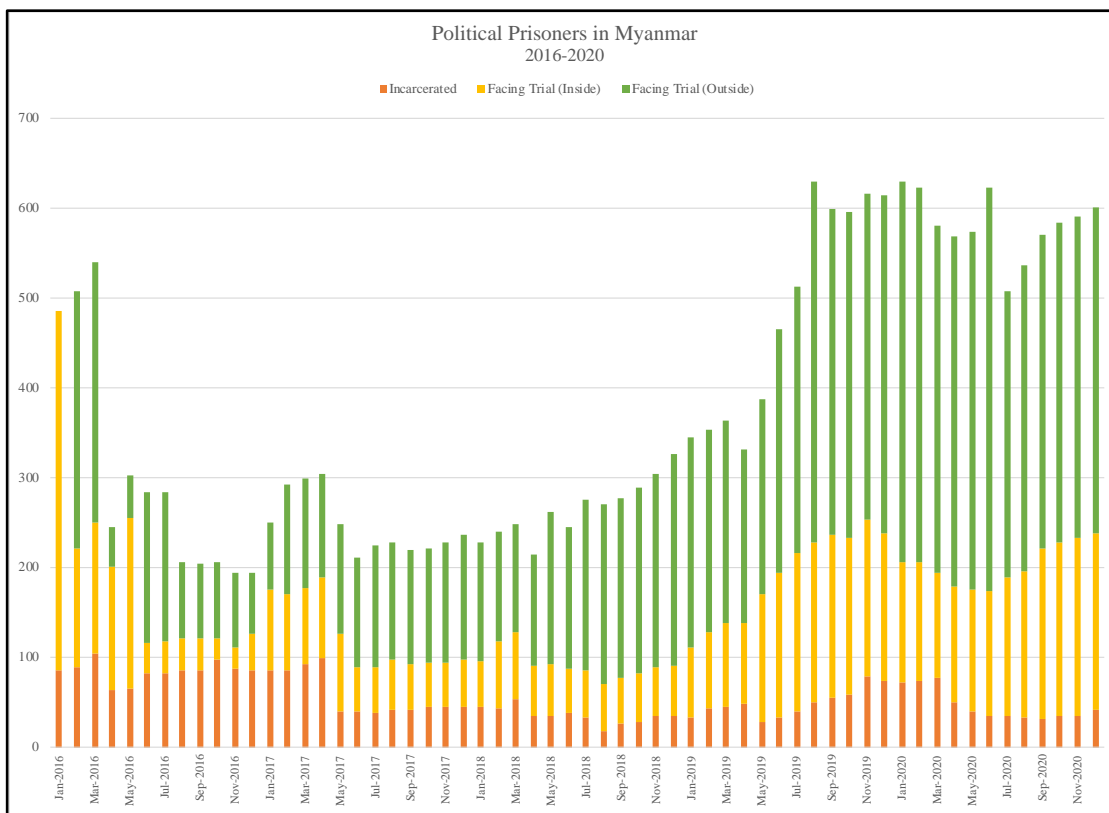
⁴ “Progress Report Regarding Kirin’s Operations in Myanmar,” Kirin Holdings, 5 June 2020, https://www.kirinholdings.co.jp/english/news/2020/0605_01.html.

⁵ “LafargeHolcim to shut down company in Myanmar,” Global Cement, 28 July 2020, <https://www.globalcement.com/news/item/11133-lafargeholcim-to-shut-down-company-in-myanmar>.

-
- ⁶ “Shipping Giant Maersk To Stop Using Military Ports in Burma,” Burma Campaign UK, 8 October 2020, <https://burmacampaign.org.uk/shipping-giant-maersk-to-stop-using-military-ports-in-burma/>.
- ⁷ “Fashion brands rethink Myanmar position after report on military ties,” *Nikkei Asia*, 26 August 2019, <https://asia.nikkei.com/Business/Business-trends/Fashion-brands-rethink-Myanmar-position-after-report-on-military-ties>.
- ⁸ “Newtec Statement on the Findings of The International Fact-Finding Mission on Myanmar,” Burma Campaign UK, 6 August 2019, <https://burmacampaign.org.uk/media/Newtec-Statement-on-the-findings-of-the-Independent-International-Fact-Finding-Mission-on-Myanmar.pdf>.
- ⁹ “EO Yangon Co. Ltd. Statement,” Justice For Myanmar, 1 March 2020, https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/603c5afb875cc7c8e02cbd3a_EO%20Yangon.png.
- ¹⁰ “British Company Portia to Stop Managing Military Port in Yangon,” Burma Campaign UK, 23 July 2020, <https://burmacampaign.org.uk/british-company-portia-to-stop-managing-military-port-in-yangon/>.

Appendix II

Political Prisoners in Myanmar, January 2016-December 2020¹



¹ AAPP Political Prisoner Lists, Assistance Association for Political Prisoners (Burma), January 2016 to December 2020, <https://aappb.org/?cat=105>.

Appendix III

Reported killings and serious injuries of Rohingya civilians (January 2020–January 2021)*

Targeted killings

| <i>Date</i> | <i>Type</i> | <i>Summary</i> | <i>Civilians killed</i> | <i>Civilians injured</i> | <i>Alleged perpetrator</i> | <i>State/Township</i> |
|------------------|----------------|---|-------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 18 February 2020 | Execution | A Rohingya civilian was executed by an identified armed group. | 1 | - | Other armed groups | Rakhine State/Mrauk-U |
| 29 February 2020 | Small arm fire | The Arakan Army ambushed a convoy of 18 Myanmar military vehicles near the village which led to a clash. Afterwards, the Myanmar military fired into a nearby Rohingya village for an hour and a half, killing six Rohingya civilians. | 6 | - | Myanmar military | Rakhine State/Mrauk-U |
| 2 August 2020 | Execution | The Myanmar police shot two Rohingya civilians. One died and another was injured. | 1 | 1 | Police | Rakhine State/Sittwe |
| 5 October 2020 | Execution | The Myanmar military entered into two adjoining villages and detained 14 villagers to be porters and guides. Some of those detained were Rohingya cattle herders. The detainees fled and one person was injured. 12 villagers out of 14 detained villagers returned to the village. Two missing civilians were found dead with gun wounds on the next day, having been used by the Myanmar military as “human shields.” | 2 | 1 | Myanmar military | Rakhine State/Buthidaung |
| 5 October 2020 | Execution | On 5 October 2020, in Minbya Township the Myanmar military shot three Rohingya civilians to death. | 3 | - | Myanmar military | Rakhine State/Minhya |
| 9 October 2020 | Execution | A Rohingya civilian was detained by the Myanmar military in Maungdaw township and later died in custody. | 1 | - | Myanmar military | Rakhine State/Maungdaw |

* Non exhaustive.

** Total: 33 killed, including 15 children and 3 women, and 38 injured.

| <i>Date</i> | <i>Type</i> | <i>Summary</i> | <i>Civilians killed</i> | <i>Civilians injured</i> | <i>Alleged perpetrator</i> | <i>State/Township</i> |
|-----------------|-------------|--|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 11 January 2021 | Execution | A Rohingya civilian went to the paddy fields at the night. His body was found the following day having been killed by an identified armed group. | 1 | - | Other armed groups | Rakhine State/Minbya |

Civilian Casualties

| <i>Date</i> | <i>Type</i> | <i>Summary</i> | <i>Civilians killed</i> | <i>Civilians injured</i> | <i>Alleged perpetrator</i> | <i>State/Township</i> |
|------------------|-----------------------------|--|-------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 25 January 2020 | Shelling | An artillery shell landed in a bed of a house and killed two Rohingya civilians and injured 7 others. | 2 | 7 | Myanmar military | Rakhine State/Buthidaung |
| 10 February 2020 | Landmine/UXO | On 10 February, four Rohingya civilians were killed and six were injured in Buthidaung township as a result of a landmine/UXO. | 4 | 6 | Unidentified | Rakhine State/Buthidaung |
| 10 February 2020 | Shelling | A Rohingya civilian was killed and three were injured by an artillery shell fired from the Myanmar military navy ship on Kaladan river. | 1 | 3 | Myanmar military | Rakhine State/Kyauktaw |
| 12 February 2020 | Shelling | An artillery shell landed into a house killing three Rohingya civilians and injuring two others. Relatives of the victims state that the artillery shell came from a security outpost where Myanmar military border guard forces are stationed. | 3 | 2 | Myanmar military | Rakhine State/Buthidaung |
| 18 February 2020 | Landmine/UXO | A Rohingya civilian was killed by a landmine blast. | 1 | 2 | Unidentified | Rakhine State/Buthidaung |
| 26 February 2020 | Small arm fire/Landmine/UXO | A Rohingya civilian who was tending the cows near a border police checkpoint was hit by stray pieces of artillery shell and killed. However, it was unclear whether he was hit and killed by the artillery shell or he stepped on a landmine and the explosion killed him. | 1 | - | Myanmar military | Rakhine State/Buthidaung |
| 6 March 2020 | Landmine/UXO | A landmine exploded while five Rohingya civilians were herding livestock in a pasture near the village. One was killed, four others were injured. | 1 | 4 | Unidentified | Rakhine State/Mrauk-U |

| <i>Date</i> | <i>Type</i> | <i>Summary</i> | <i>Civilians killed</i> | <i>Civilians injured</i> | <i>Alleged perpetrator</i> | <i>State/Township</i> |
|---------------|------------------|--|-------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 9 March 2020 | Landmine/ UXO | A mine killed one Rohingya civilian and injured five others. | 1 | 5 | Unidentified | Rakhine State/Mrauk-U |
| 10 March 2020 | Landmine/ UXO | A landmine went off as two Rohingya civilians were herding cattle. One died on the way to the hospital. | 1 | - | Unidentified | Rakhine State/Rathedaung |
| 22 April 2020 | Small arm fire | A Rohingya civilian was killed in a crossfire between the Arakan Army and the Myanmar military. Six others were injured. | 1 | 6 | Unidentified | Rakhine State/Minbya |
| 12 May 2020 | Landmine/ UXO | A landmine explosion killed two Rohingya civilians and injured one. | 2 | 1 | Unidentified | Rakhine State/Buthidaung |

Appendix IV

Countries with arms embargoes against Myanmar

| <i>No.</i> | <i>Country</i> | <i>Description</i> |
|------------|------------------------|--|
| 1 | Albania | Aligned with EU sanctions and embargo. |
| 2 | Armenia | Aligned with EU sanctions and embargo. |
| 3 | Australia | Australia bans the direct or indirect sale or transfer of arms and related materials, as well as the provision of services related to the supply, manufacture, maintenance, or use of arms and related material under the Autonomous Sanctions Regulations of 2011. ¹ |
| 4 | Bosnia and Herzegovina | Aligned with EU sanctions and embargo. |
| 5 | Canada | Since 2007, Canada has imposed an arms embargo, which includes the prohibition of exporting or importing arms and related material, or related technical and financial assistance, to and from Myanmar, under the Special Economic Measures Act. ² |
| | European Union | The EU has maintained an embargo on arms, munitions, and military equipment since 1991. ³ In recent years, the EU has expanded the embargo to include an export ban on dual-use goods, monitoring communications equipment, and prohibitions on military training and cooperation. ⁴ |
| 6 | Austria | EU member state – sanctions, arms embargo applies. |
| 7 | Belgium | EU member state – sanctions, arms embargo applies. |
| 8 | Bulgaria | EU member state – sanctions, arms embargo applies. |
| 9 | Croatia | EU member state – sanctions, arms embargo applies. |
| 10 | Cyprus | EU member state – sanctions, arms embargo applies. |
| 11 | Czech Republic | EU member state – sanctions, arms embargo applies. |
| 12 | Denmark | EU member state – sanctions, arms embargo applies. |
| 13 | Estonia | EU member state – sanctions, arms embargo applies. |
| 14 | Finland | EU member state – sanctions, arms embargo applies. |
| 15 | France | EU member state – sanctions, arms embargo applies. |
| 16 | Germany | EU member state – sanctions, arms embargo applies. |
| 17 | Greece | EU member state – sanctions, arms embargo applies. |
| 18 | Hungary | EU member state – sanctions, arms embargo applies. |
| 19 | Ireland | EU member state – sanctions, arms embargo applies. |
| 20 | Italy | EU member state – sanctions, arms embargo applies. |
| 21 | Latvia | EU member state – sanctions, arms embargo applies. |
| 22 | Lithuania | EU member state – sanctions, arms embargo applies. |
| 23 | Luxembourg | EU member state – sanctions, arms embargo applies. |
| 24 | Malta | EU member state – sanctions, arms embargo applies. |
| 25 | Netherlands | EU member state – sanctions, arms embargo applies. |
| 26 | Poland | EU member state – sanctions, arms embargo applies. |

| <i>No.</i> | <i>Country</i> | <i>Description</i> |
|------------|-----------------|--|
| 27 | Portugal | EU member state – sanctions, arms embargo applies. |
| 28 | Romania | EU member state – sanctions, arms embargo applies. |
| 29 | Slovakia | EU member state – sanctions, arms embargo applies. |
| 30 | Slovenia | EU member state – sanctions, arms embargo applies. |
| 31 | Spain | EU member state – sanctions, arms embargo applies. |
| 32 | Sweden | EU member state – sanctions, arms embargo applies. |
| 33 | Iceland | Aligned with EU sanctions and embargo. |
| 34 | Liechtenstein | Aligned with EU sanctions and embargo. |
| 35 | Moldova | Aligned with EU sanctions and embargo. |
| 36 | Montenegro | Aligned with EU sanctions and embargo. |
| 37 | North Macedonia | Aligned with EU sanctions and embargo. |
| 38 | Norway | Aligned with EU sanctions and embargo. |
| 39 | Switzerland | Aligned with EU sanctions and embargo. ⁵ |
| 40 | United Kingdom | Following its exit from the EU, the UK adopted various restrictions on the trade of military and dual-use goods as well as prohibitions on the provision of monitoring communications equipment and military-related services to Myanmar. These regulations under the Burma (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 work to the same effect as the current EU sanctions and regulations on military goods. ⁶ |
| 41 | United States | On June 9, 1993, the United States issued Public Notice 1820 suspending all export licenses and other approvals to export or otherwise transfer defense articles or defense services to Burma, and since 1999, the US has designated Myanmar as a “Country of Particular Concern” under the International Religious Freedom Act of 1998, enacting the arms embargo in 22 CFR 126.1(a). ⁷ |

¹ “Sanctions Regimes: Myanmar,” Government of Australia, <https://dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/Pages/myanmar.aspx>.

² “Canadian Sanctions Related to Myanmar,” Government of Canada, https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-internationales/sanctions/myanmar.aspx?lang=eng.

³ Declaration by the General Affairs Council, July 29, 1991.

⁴ Council Decision (CFSP) 2020/563 of 23 April 2020 amending Decision 2013/184/CFSP concerning restrictive measures against Myanmar/Burma, <https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2020/563/oj>; “Declaration by the High Representative on behalf of the EU on the alignment of certain countries concerning restrictive measures against Myanmar/Burma,” European Council, 18 May 2020, <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/05/18/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-alignment-of-certain-countries-concerning-restrictive-measures-against-myanmar-burma/>.

⁵ “Mesures à l’encontre du Myanmar (ex-Birmanie),” Secrétariat d’Etat à l’économie SECO, 17 October 2018, https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-myanmar--burma-.html.

⁶ The Burma (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, <https://www.legislation.gov.uk/ukxi/2019/136/contents/made>.

⁷ United States, Code of Federal Regulations, Title 22 §126.1, https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?node=22:1.0.1.13.63&rgn=div5#se22.1.126_11.